

**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO**  
**ESCUELA DE POSGRADO**  
**MAESTRÍA EN DERECHO**  
**CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**



**TESIS**

**La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones  
iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada  
en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque –  
Período 2020 – 2021**

**Para optar el Grado Académico de:**  
**Maestra en Derecho con mención en Ciencias Penales**

**Investigador:**  
**Abog. Zully Criss Chimpén Cadenillas**

**Asesor:**  
**Mag. Mary Isabel Colina Moreno**

**Lambayeque, 20 de Julio del 2023**

**La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas  
contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de  
Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.**



Abog. Zully Criss Chimpén Cadenillas

Autor



Mag. Mary Isabel Colina Moreno

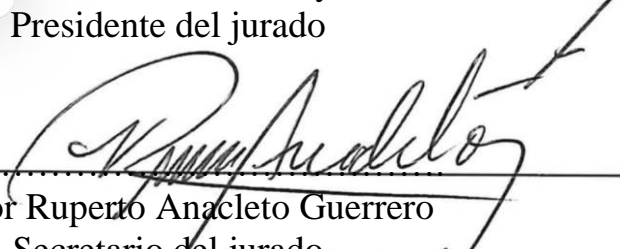
Asesor

Tesis presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo para  
optar el Grado Académico de: MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS  
PENALES.

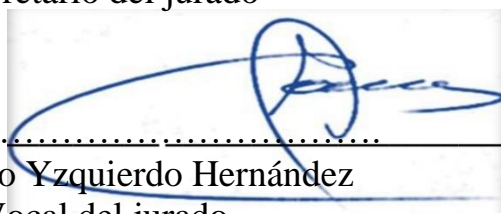
Aprobado por:



Dr. \_\_\_\_\_  
Ezequiel Baudelio Chavarry Correa  
Presidente del jurado



Dr. ....  
Víctor Ruperto Anacleto Guerrero  
Secretario del jurado -



Mag.. .....  
Leopoldo Yzquierdo Hernández  
Vocal del jurado

Lambayeque, 20 de Julio del 2023

## DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo MARY COLINA MORENO, Asesor de tesis, del estudiante, ZULLY CRISS CHIMPÉN CADENILLAS titulada: “La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021”, posterior a una exhaustiva revisión del presente trabajo declaro que presentó un índice de similitud de 13 % corroborado mediante programa académico anti-plagios Turnitin.

La asesora que suscribe, ha efectuado el análisis del presente reporte y se arribó a la conclusión que las coincidencias que se han detectado en el porcentaje señalado, no constituyen plagio. Por lo cual se da fe de la originalidad del presente trabajo, el cual cumple con las normas de protección de derecho de autor, normas sobre el uso de referencias y citas señaladas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

***Lambayeque, 2 de Marzo del 2023.***



---

**Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO**  
**D.N.I N° 40997649**  
**ASESORA**

## DEDICATORIA

A mi “regalito de Dios” que me convirtió en mamá, y desde el día uno, me enseñó que puedo lograrlo todo, mi Gia Ainara, quien desde antes de conocerla y hasta hoy, me enseña el amor más puro y tierno. Mi bebé, mi motivación del día a día para ser mi mejor versión.

A mi madre, *Zully Martha Cadenillas Segura*, por su apoyo incondicional, por sus sabios consejos y sobre todo por sus incansables oraciones para que Dios cuide de mí, cuide de mi familia, y siempre pueda lograr mis sueños.

A mi padre, *Sergio Chimpén Ojeda*, por ser una imagen de superación en mi carrera profesional.

A mi “papito Lolo”, mi ángel del cielo, quien siempre aplaudió mis pequeños logros.

## AGRADECIMIENTO

A *DIOS*, por permitirme culminar mis estudios de post grado, seguir capacitándome académicamente y hoy, llegar a esta gran meta. A *la Virgen María* y *Cruz de Motupe* por su infinita bondad siendo la luz en cada anochecer.

A la doctora *Mary Colina Moreno*, por su valiosa colaboración.

A mi esposo, "*Pdrito P.M*", por formar parte de mis días desde hace casi 12 años, por su apoyo para llegar a cumplir cada propósito personal y académico, por sus atenciones y cuidados en nuestra familia.

## Índice General

Índice General	6
RESUMEN	8
ABSTRACT	9
I. INFORMACIÓN GENERAL	10
II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	13
2.1 Descripción de la Realidad Problemática	13
2.2 Formulación del Problema de Investigación	17
2.3 Objetivos de la Investigación	17
Objetivo general	17
Objetivos específicos	17
2.4 Justificación de la Investigación	17
2.5 Limitaciones del estudio	19
III. DISEÑO TEÓRICO	20
3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	20
3.1.1 Antecedentes Internacionales:	22
3.1.2 Antecedentes Nacionales:	24
3.2 BASE TEÓRICA	27
3.2.1 Generalidades del Proceso Penal:	27
3.2.2 El Derecho Procesal Penal y su Constitucionalización:	30
3.2.3 Principios del Derecho Procesal Penal dentro de la Constitución:	31
a) Tutela Judicial	31
b) Derecho al debido proceso:	32
c) Presunción de inocencia	34
d) Derecho de defensa	34
3.2.4 Los Principios del Nuevo Código Procesal Penal	36
a) Legalidad:	36
b) Transparencia	37
c) Igualdad de armas	38
d) Oralidad	38
e) Contradicción	39
f) Inmediación	39

g) Garantismo	40
3.2.5 Etapas del proceso penal – conceptos generales	41
3.2.6 Las Diligencias Preliminares en los casos de Corrupción de Funcionarios:	44
3.2.7 Principales actores del Proceso Penal:	46
3.2.8 Intervención de la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción:	52
3.2.9 El testigo:	55
3.2.10 Tutela de Derechos:	57
3.3. Operatividad de las Variables	59
3.4 Hipótesis	60
IV. DISEÑO METODOLÓGICO	61
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	61
4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN	62
4.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN	64
4.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO	64
4.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS	65
4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS	66
4.7 RESULTADOS:	66
4.7.1 Presentación de los Resultados:	66
4.7.2 Resultados del análisis de la doctrina	67
4.7.3 Resultados del análisis jurisprudencial	72
4.7.4 Interpretación y análisis de las Carpetas Fiscales analizadas	75
Las Carpetas Analizadas	75
Interpretación de las carpetas analizadas	76
Análisis interpretativo	79
V. CONCLUSIONES	83
VI. RECOMENDACIONES	87
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	88
ANEXOS	96

## RESUMEN

Esta indagación académica surge de la observancia del fenómeno que existe en la realidad dentro de la práctica de las actividades de investigación fiscal iniciales, diligencias preliminares o investigación preparatoria, donde la instrucción se dirige contra “los que resulten responsables” a fin de poder efectuar diligencias de investigación contra presuntos “testigos”, contra los cuales posteriormente se abrirá investigación preparatoria o formulará acusación, cuando de la práctica se puede ver que la noticia criminal, informe especial o denuncia con la que se tomó conocimiento del hecho delictivo, se puede extraer claramente una individualización concreta del o los potenciales inculpados, evidenciando una vulneración a determinados derechos como el debido proceso, a la defensa y tutela de derechos. Para entrar en análisis y posterior discusión, se ha tenido a bien hacer una recopilación de información documental, doctrinal, bibliográfico que permita ilustrar respecto de la materia en observación y poder llegar a determinadas conclusiones, corroborando el planteamiento de la hipótesis, concluyendo que esta práctica muchas veces disfrazada como estrategia por parte del persecutor, sí genera una afectación a distintos derechos dentro de la pre etapa de diligencias preliminares, desconociendo derechos constitucionales amparados por la ley suprema a favor de los inculpados. Al respecto, se concluye que es necesaria un nuevo planteamiento o reestructuración de lo señalado en el artículo 166 del Nuevo Código Procesal Penal, respecto al contenido de la declaración, debido a que, este dispositivo al contener pautas que debe tener la declaración de una persona citada como testigo, se ha convertido en una herramienta procesal orientada a obtener respuestas de manera ilegal que busca encontrar la responsabilidad penal de una persona mediante su declaración como testigo, a pesar que el Ministerio Público, por criterios de la razón y la lógica, conoce que es altamente probable que esta persona será posteriormente investigada.

**Palabras Claves:** Derecho Procesal Penal, Derecho de Defensa, Investigación, Diligencias Preliminares, Debido Proceso, Tutela de Derechos, Ministerio Público, Órgano jurisdiccional.



## ABSTRACT

This academic inquiry arises from the observation of the phenomenon that exists in reality within the practice of the initial prosecutorial investigation activities, preliminary proceedings or preparatory investigation, where the instruction is directed against "those who are responsible" in order to be able to carry out investigative proceedings against alleged "witnesses", against whom a preparatory investigation will later be opened or an accusation will be formulated, when from the practice it can be seen that the criminal notice, special report or denunciation with which the criminal act was taken knowledge of, a concrete individualization of the potential accused can be clearly extracted, evidencing a violation of certain rights such as due process, defense and protection of rights. In order to enter into the analysis and subsequent discussion, it has been deemed appropriate to compile documentary, doctrinal and bibliographic information that allows to illustrate the matter under observation and to reach certain conclusions, corroborating the approach of the hypothesis, concluding that this practice, often disguised as a strategy by the prosecutor, does generate an affectation to different rights within the pre-stage of preliminary proceedings, ignoring constitutional rights protected by the supreme law in favor of the defendants. In this regard, it is concluded that a new approach or restructuring of Article 166 of the New Criminal Procedure Code is necessary, regarding the content of the statement, due to the fact that this provision, by containing guidelines that the statement of a person summoned as a witness must have, has become a procedural tool oriented to obtain answers in an illegal manner that seeks to find the criminal responsibility of a person through his statement as a witness, even though the Public Ministry, by criteria of reason and logic, knows that it is highly probable that this person will be later investigated.

**Key words:** Criminal Procedural Law, Right to Defense, Investigation, Preliminary Diligences, Due Process, Protection of Rights, Public Prosecutor's Office, Jurisdictional Body.

## **I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1 Título:** “La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021”

**1.2 Autor:** Zully Criss Chimpén Cadenillas

**1.3 Asesor:** Mag. Mary Isabel Colina Moreno

**1.4 Línea de Investigación / Programa de investigación**

**1.5 Lugar:** Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque

**1.6 Duración estimada del Proyecto:** 3 meses

Fecha de inicio: 14-10-2021

Fecha de término: 14-12-2021

## INTRODUCCIÓN

Las Diligencias Preliminares (DP) son una subfase dentro de la Etapa de Investigación Preparatoria (IP), la cual se inicia por disposición del Ministerio Público desde los primeros actos de búsqueda de información sobre determinados aspectos, luego de recepcionada la denuncia. Para dicho fin, cuenta con el apoyo de la PNP, institución a disposición de lo que señale el Fiscal, quien exhorta qué actuaciones de urgencia o imprescindibles son las que se deberán actuar; esta etapa la inicia el Ministerio Público (MP) junto a la Policía Nacional de necesitarlo, sin embargo, ello no siempre fue así.

El sistema jurídico de nuestro país ha venido en evolución a lo largo del tiempo, el cambio se debe a las variaciones de las tendencias ideológicas y políticas que predominan cada etapa social en la nación peruana. El antecesor de nuestro Nuevo CPP del 2004, se creó en 1940 publicándose con la denominación Código de Procedimientos Penales, durante su vigencia, el sistema judicial penal adoptó en ese entonces, una característica burocrática, rígida y secreta, se le criticó y consideró como lento e injusto, interfiriendo así con garantizar la libertad de las personas, la economía procesal, el derecho común, el bienestar de la sociedad y la democracia de la nación.

Nuestro código adjetivo penal vigente, se focaliza en regular que los procesos se cumplan con una calidad de transparencia real, oportuna y garantista de los derechos fundamentales de las partes, por tanto, el proceso debe desarrollarse bajo el respeto al derecho de defensa, igualdad y contradicción, eso es lo que se pretende buscar con esta norma objetiva. El modelo procesal penal actual, debe encaminar o parametrar el proceso dentro de la rapidez, eficacia y justicia que promulga en sus lineamientos. Las actuaciones deben desarrollarse dentro de los procedimientos y garantías que correspondan, respetando los derechos fundamentales asistentes a las partes.

No obstante, en la práctica, hay una abertura o espacio al momento del inicio de las Diligencias Preliminares hasta la formalización de la etapa de IP, pequeña pero aprovechable por algunos persecutores del delito, la cual puede ser aprovechada para realizar prácticas contra-venientes al derecho de defensa del o los inculpados.

El obstruir a una persona del pleno ejercicio de su defensa durante una investigación seguida en su contra sumando disposiciones o actos que impliquen una posible afectación a los

derechos del implicado, es resaltar y avivar los poderes de actividad de investigación que el propio Estado le otorga al representante del MP, empero que, en atención a este poder, se ve con la facilidad de sobreponerse sobre los derechos reconocidos constitucionalmente del o los investigados. Pero, la postura garantista de nuestra legislación penal es clara al obligar al Estado a tratar al encausado como individuo al que la norma suprema y normas especiales le asisten derechos que deben ser observados durante el proceso, y no solo a partir del proceso como mero formalismo en un sentido estricto, sino en el sentido amplio de este concepto.

## **II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN**

### **2.1 Descripción de la Realidad Problemática**

El fiscal titular de la persecución del delito, es quien opera bajo la titularidad del ejercicio de la acción penal conferida por nuestra Constitución en el artículo 159°, pudiendo iniciar sus acciones de oficio, a petición de la víctima o por testigo del hecho, así como por tomar conocimiento de la noticia policial o denuncia. Este conduce desde un inicio el proceso de investigación del hecho ilícito, siguiendo un criterio de carácter objetivo, desarrollando la investigación bajo los parámetros de la carta magna y demás disposiciones legales que derivan de esta, o eso es lo que se entiende de lo preestablecido en la norma.

Ahora bien, en la mayoría de casos al conocerse una noticia criminal o hecho ilícito de persecución pública, el titular de la acción penal inicia diligencias de oficio. En este contexto, ante la sospecha de la existencia de un hecho ilegal o prohibido penalmente, sea porque fue denunciado de forma escrita, o porque fiscalía tomó conocimiento a partir de una nota periodística televisiva, radial o escrita, incluso a partir de publicaciones en redes sociales, se debe disponer, en atención al punto 28 de la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, el inicio de diligencias preliminares; así mismo para formalizarla la etapa preparatoria, se necesita de contar con una evidente, clara y precisa “sospecha reveladora”, consecuentemente para formular acusación y dictar auto de enjuiciamiento se necesita de “sospecha suficiente”, y en el caso de querer solicitar prisión preventiva se requiere de “sospecha grave”, siendo esta la más fuerte de todas; sin embargo qué pasa, cuando desde un inicio se tiene la “sospecha suficiente” e individualizados a los actores, sin embargo por estrategia se inicia diligencias preliminares omitiendo esta información con un fin estratégico.

Teniendo esa idea, en muchos de los casos, fiscalía opta por iniciar la subfase de investigación preliminar dirigido “contra los que resulten responsables” (contra LQRR), porque se presume que se tiene el conocimiento del hecho, pero la identificación del presunto autor es desconocida. La fórmula utilizada no causaría mayor alarma en la medida de que el caso lo amerite, como puede suceder, por ejemplo, frente a la existencia de un cadáver, o en el hecho que alguien hubiera sustraído bienes de un particular o asaltado a determinada

persona y que no se hubiera podido reconocer al agente activo, donde la identidad del autor es inicialmente, por lo general es desconocida.

Pero, en la realidad práctica, se presentan casos en los que, pese a que la identidad del presunto autor es palmaria, sea porque su nombre completo consta señalado en la denuncia escrita presentada, por indicios directos reportados por la autoridad competente, o yace escrito en la noticia criminal propalada en los medios de comunicación o redes sociales, pese a ello fiscalía dispone aperturar diligencias contra LQRR, puesto que el señalar contra quien se abre una investigación recae en manos del fiscal en base a los elementos que se tienen a disposición en dicho momento, además el término “*contra los que resulten responsables*” no se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal, pese a tener un gran relevancia procesal, pues es parte del primer escalón del camino de la investigación fiscal.

Determinado sector, podría argumentar que tal proceder constituye una **estrategia de investigación** aplicada para acopiar elementos de prueba, tanto de descargo como cargo que determinen, en primer término, la ilicitud o no del hecho denunciado, y, en segundo término, la identidad de sus autores. Sin embargo, no puede pasar desapercibido en la medida que, procesalmente, haya la posibilidad que el potencial responsable de los hechos denunciados, no pueda acceder a la revisión de la carpeta fiscal o pedir copias de la misma, incluso, impedido de controlar el plazo de las diligencias preliminares, de solicitar actos de investigación, de plantear tutela de derechos, recusar al Fiscal del caso, solicitar su inhibición, cuestionar su competencia funcional o solicitar un informe oral ante el Fiscal Superior en el supuesto que el caso sea archivado. **Y es que se argumenta que solo tales prerrogativas de defensa la ostentan el imputado cuyo nombre consta en la disposición de apertura de diligencias preliminares, requisito que, en términos formales, no cumple la persona al que hemos denominado “falso desconocido”**, es decir, se apertura la subfase preliminar de investigación contra LQRR, es decir supuestos desconocidos cuando en la realidad, de la información, denuncia o noticia, ya se tiene individualizada a una o varias personas contra quienes va dirigida la investigación.

La práctica enseña que la gravedad puede ir más allá, en los casos que, fiscalía cita al “**falso desconocido**” (el sindicado en la denuncia, pero que no consta como tal en la disposición de apertura) para que rinda su declaración en calidad de testigo, rigiéndose, por tanto, bajo el texto del artículo 162 y siguientes del Código Procesal Penal, y no bajo los causes normativos

del artículo 86 y siguientes del Código citado. Y esto sí es grave, pues afecta directamente con el principio del debido proceso y la facultad fundamental a ejercer eficientemente el derecho de defensa en cualquier estado del proceso, señalados en el artículo 139 incisos 3 y 14 respectivamente de la Constitución Política del Perú; en esa misma línea se contravienen, tanto los derechos del imputado como la función de su abogado defensor, dimensiones normadas dentro del artículo 71 en adelante del Código Procesal penal, al configurarse al **“falso desconocido”** como un testigo dentro de las diligencias preliminares.

Planteemos una circunstancia supuesta, en la que, en una investigación típica de corrupción, como el delito de colusión, donde se detectaron irregularidades en una ejecución de obra pública, es muy probable que el fiscal no sepa con certeza quienes son los funcionarios coludidos para poder abrirles investigación, ya que existen varios funcionarios en diversas áreas dentro de la institución u órgano público, o quizá todos puedan estar implicados. Sin embargo, hay algo de lo que sí puede tenerse certeza, esto es la identificación de quienes serían los principales interesados y beneficiados con el hecho de colusión, siendo los principales sospechosos el ganador de la buena pro y quien ejecuto dicha obra, este es llamado por la doctrina como el *Extraneus*. A pesar de las evidencias lógicas y razonables, en la práctica, el fiscal inicia preliminares contra LQRR, en este caso sería un falso desconocido por cuanto ello se vuelve inverosímil, pues en vez de abrir investigación contra la persona individualizada, optan por realizar esta mala práctica con el objeto de ejecutar diligencias preliminares, impidiendo u obstaculizando que las partes tomen conocimiento de los hechos o ser partícipes de los actos de investigación.

Es decir, tomando el ejemplo expresado en el párrafo precedente, y como en muchos otros casos más de delitos de corrupción, el persecutor penal, al conocer la noticia criminal mediante información cursada por Procuraduría, llega a tener acceso al contenido de diversos informes de control o auditorias de Contraloría General, cabe resaltar que estos informes tienen la calidad de documentos técnicos especializados de carácter oficial, así lo reconoce el art. 201 del C.P. Penal, es una documental extra penal; y conforma a su complejidad, estas documentales precisan indicios claros de un posible hecho delictivo, guardan en sí mismos elementos fácticos fáciles de corroborar, tienen calidad de pericia y dentro del informe se pueden individualizar a los presuntos autores y participantes, muchas otras veces describe la modalidad en cómo se produjo el ilícito, explica muchas otras veces la secuencia en que se

dieron las etapas del proceso de licitación, aparentando legalidad, de toda esta información lo resaltante es que según la base de datos a la que se tiene acceso para realizar estas pericias, se puede identificar fácilmente al beneficiado de las tratativas con el Estado. De lo precisado, podemos deducir que el representante del Ministerio Público, ya contaría con información clave y elementos concretos para determinar la identidad de los presuntos autores del hecho y formalizar en lo más breve posible, investigación preparatoria, no obstante, para aprovechar esta abertura procesal, inicia la etapa preliminar de investigación contra los que resulten responsables (LQRR).

Además, sumando a lo precisado en el párrafo anterior, la fiscalía, pese a no formalizar investigación contra el ganador de la buena pro y determinados funcionarios públicos contando con los elementos suficientes, inicia diligencias preliminares sin incluirlos o sin precisar contra quienes se dirigen, sin embargo, estos posibles o potenciales a acusados reciben el trato como si lo fueran, ya que al ser citados en calidad de testigos para dar sus declaraciones a nivel de fiscalía, son sometidos a un extenso número de preguntas indagatorias, se les solicita mostrar o exhibir documentos, son pasibles de la ejecución de allanamientos domiciliarios o de sus oficinas, pese a que aún se encuentran en la calidad de testigos. Ante estas conductas de investigación, contrarias al orden garantista, se puede concluir una afectación al derecho de defensa que les asiste a los “testigos” investigados, obteniendo pruebas contrarias al debido proceso y al derecho, transgrediendo derechos fundamentales.

Pero pese a la gravedad del problema descrito, no existe a la fecha herramienta procesal legal alguna que pueda contrarrestar estos actos, ni muchos menos hay antecedentes jurisprudenciales que puedan habilitar la corrección del accionar fiscal en estos casos. Por ello, y en tanto que la realidad descrita no es ajena dentro de la jurisdicción de Lambayeque, se tomó la decisión de plantear esta investigación con foco en el actuar del Ministerio Público, de las fiscalías especializadas en corrupción, del distrito de Lambayeque.

Lo que pretendemos en el despliegue de este trabajo, es deslindar sobre la licitud o no del accionar fiscal, y, en esencia, puntualizar acerca de los mecanismos que nos permiten establecer la finalidad garantista de los derechos que ostenta el **“falso desconocido”**, situación que se esconde mediante la disposición fiscal especializado en corrupción, de abrir diligencias previas ***“contra los que resulten responsables”***.



## **2.2 Formulación del Problema de Investigación**

¿Se vulnera el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el “falso desconocido”, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021?

## **2.3 Objetivos de la Investigación**

Partiendo del problema planteado, como objetivos contamos con los siguientes:

### **Objetivo general**

- Analizar de qué manera se afecta el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.

### **Objetivos específicos**

- Explicar la naturaleza jurídica y constitucional del derecho de defensa, así como su aplicación en el ámbito nacional e internacional.
- Analizar desde la naturaleza jurídica de las declaraciones testimoniales en base al NCPP y el desarrollo dogmático y jurisprudencial de éste.
- Determinar e identificar que en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido se puede afectar el derecho de defensa, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.
- Proponer una propuesta legislativa materializado en un proyecto de ley, para prevenir las posibles afectaciones que se pueden dar en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.

## **2.4 Justificación de la Investigación**

Durante el planteamiento de la investigación y su ejecución, se puede establecer que tiene justificación de carácter social, económico y legal, tiene pertinencia académica,

metodológica y utilidad práctica, son en estas esferas en las que la presente investigación da su aporte crítico y académico.

En cuanto a la relevancia social, los resultados, conclusiones y recomendaciones que se plasman en el trabajo, cobran una significativa importancia en el ámbito social, ya que esta investigación recae sobre un problema que puede afectar a cualquier ciudadano que pueda verse parte de un proceso penal, lo que debe acotar es al esclarecimiento y precisión de las modificaciones legislativas de la norma pública, con la finalidad de no caer en excesivos cuestionamientos o mesuradas interpretaciones.

A nivel de implicancia económica, es necesario saber las exigencias o costos que deberá plantear el Estado para desarrollar un análisis correcto y preciso de la norma procesal penal, en cuanto a la abertura de diligencias preliminares contra los que resulten responsables y las actuaciones que en esta se realizan y el reconocimiento de los derechos procesales y fundamentales de quienes se ven implicados. Por tanto, la inversión económica que realice el Estado con dicho fin, es debido a que es el Estado el obligado a respetar el sistema garantista que adopta nuestra legislación penal.

Respecto a la utilidad académica, al desarrollar este trabajo, se suma al acervo de investigaciones académicas de distintas problemáticas legales, las mismas que plantean posibles soluciones que son pasibles de evaluación para determinar si alguna es la más idónea, en ese sentido, al haberse recopilado información precisa, detallado el fenómeno exacto, servirá de utilidad para otros operadores del derecho que enfoquen su investigación en este ámbito procesal de las diligencias preliminares, pudiendo ser fuente de otros estudios, o proyectar un interés en la comunidad jurídica que motive a seguir investigando para ampliar la información de los conocimientos aportados.

A nivel institucional, está obedece básicamente a que el Ministerio Público debe tomar una postura desde el punto vista constitucional en la imputación que debería realizarse en la disposición de inicio de diligencias preliminares, pues si bien es cierto en esta etapa no se exige una imputación necesaria fuerte, pero sí debería mínimamente preocuparse por atribuirle a cada sujeto que de repente se encuentra individualizado en la denuncia.

En el aspecto legal, considero necesario un mayor análisis ante todo partiendo en la Constitución, debido a que, si solo existen hechos copiados de la denuncia en la disposición

de inicio de diligencias preliminares contra personas ya identificadas, y no existe una evidente imputación, aunque sea exigible mínimamente, el debido proceso en su manifestación del derecho defensa se encontraría vulnerado.

En cuanto a lo metodológico, el trabajo ha cuidado el uso de los criterios metodológicos para el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis, se ha cuidado los métodos de investigación para recopilar información, cumpliendo con la validez de la aplicación de técnicas o instrumentos para establecer el resultado y aplicar la discusión, resultando en conclusiones positivas para nuestra hipótesis y el planteamiento de una posible modificatoria con el fin de prevenir o disminuir los casos en que se dé la problemática planteada.

Por último, a nivel práctico, la investigación buscará describir la realidad actual de la realidad objeto y análisis de la presente investigación.

## **2.5 Limitaciones del estudio**

En puridad, la presente investigación se desarrollará a través de una recopilación y acopio de disposiciones de inicio de diligencias preliminares en los cuales se verifique dos situaciones problemáticas que son materia de estudio de la presente investigación: **i)** En el inicio de diligencias preliminares no se evidencia una imputación exigiblemente mínimamente en los sujetos que se ha iniciado investigación, y **ii)** En el inicio de diligencias preliminares se cita a sujetos como testigos, pero que sin embargo en la denuncia se encuentra ya individualizados los sujetos y la imputación específica en contra de ellos.

La limitación más agobiante considero que es el tiempo, teniendo en cuenta que es la recopilación de las disposiciones de inicio de diligencias preliminares que serán recopiladas en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque.

Así mismo, es un obstáculo la naturaleza misma de los casos de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, pues estos tienen carácter de ser secretos mientras dure la investigación, en ese sentido, la información de análisis es de difícil acceso, no se podría recopilar información sobre un caso que no haya llegado a una etapa de formalización de la investigación preparatoria y la presentación del requerimiento fiscal, etapas posteriores de donde se produce la afectación al derecho de defensa del “falso desconocido.”

### **III. DISEÑO TEÓRICO**

#### **3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

El proceso penal ha venido cambiando a lo largo del tiempo, en función a las tendencias e ideologías políticas preponderantes de cada etapa social del Perú. Para determinar si la visión del proceso penal tiene un carácter acusatorio, inquisitivo o garantista, debemos tomar en cuenta el enfoque que se le atribuyen a diversos factores dentro del proceso como los principios, las garantías, el modo de persecución del delito, el rol del actor del proceso, el criterio para la determinación del autor del hecho ilícito, así como la forma y medios de llegar a la solución del proceso.

Anteriormente el Código de Procedimiento Penales de 1940, durante su vigencia, el sistema judicial penal adoptó en ese entonces, una característica burocrática, rígida y secreta, además según el Instituto de Defensa Legal, lo consideró como lento e injusto <sup>1</sup>, interfiriendo así con garantizar la libertad de las personas, la economía procesal, el derecho común, el bienestar de la sociedad y la democracia de la nación.

En este código adjetivo, cuando no se tenía conocimiento de la identidad o no se pudiera determinar la misma del posible autor del hecho, era el propio juez penal quien expedía un Auto, denominado “Auto Apertorio de Instrucción”, y se dirigía la instrucción contra la figura de “LQRR” durante todo la etapa de investigación, esta etapa se le conoce como la etapa de instrucción, dirigida a esclarecer y determinar los hechos, es el análogo a la fase formal de IP, pese a que no se individualizaba al autor del hecho criminal. En la mayoría de los casos. En no pocos casos, durante este sistema procesal, luego de la instrucción el Ministerio Público planteaba su acusación contra personas que no tenían conocimiento que el proceso de instrucción se seguía contra ellas, afectando su derecho pues para poder ejercer y hacer valer ante el juez sus derechos, el acusado debe conocer o tener conocimiento de la investigación que se sigue en su contra y de todo el contenido que se ha ido obteniendo para que pueda plantear una defensa concreta y efectiva.

---

<sup>1</sup> Reporte "¿Cómo es el Proceso Penal según el Nuevo Código Procesal Penal?" - Instituto de Defensa Legal (IDL) – 2009, pág. 5.

Actualmente, nuestro país tiene instaurado el nuevo modelo procesal penal, mediante el Nuevo Código Procesal Penal del 28 de julio del 2004, el mismo que se construye sobre la base de un sistema acusatorio y garantista, que procura el resguardo de los derechos constitucionales, sumado a ello trajo consigo la oralidad como esencia del proceso penal; además se acogió el principio de ecuanimidad de armas procesales, lo que faculta a las partes para observar y plantear contradicción respecto a la imputación en base a los medios probatorios que se han recabado. Dentro de esta norma procesal, además de haber acopiado estos principios, se trató de relegar las malas prácticas procesales, o eso es lo que se creía, esto es aperturar investigaciones “contra los que resulten responsables”; pues es necesario, vital y obligatorio que para que proceda una investigación penal, es esencial individualizar al autor o presunto autor del hecho, así como determinar los posibles cómplices o participantes; de esta manera nos podemos asegurar que la persecución penal del delito se siga contra quien se cometió, brindando y garantizando la igualdad de armas con las que cuenta su persecutor.

El Nuevo Código Procesal, se focaliza en regular que los procesos se cumplan con una calidad de transparencia real, oportuna y garantista de los derechos fundamentales de las partes, por tanto, el proceso debe desarrollarse bajo los principios de contradicción e igualdad. Por tanto, el nuevo modelo procesal penal, debe encaminar o parametrar el proceso dentro de la rapidez, eficacia y justicia, iniciándose investigaciones preliminares dentro de los procedimientos y garantías que correspondan, respetando los derechos fundamentales asistentes a las partes; tal como señala el apartado 61 inciso 1 del Nuevo CPP.

No obstante, conocemos de la realidad, que ciertas actuaciones iniciales llevadas a cabo por la autoridad persecutora del delito que debía asegurar el carácter garantista del proceso, Ministerio Público, pueden llegar a vulnerar diferentes derechos y principios, como una imputación necesaria, o el derecho a la defensa, ante ello la salida idónea es el poder solicitar tutela de derechos, no obstante, si sabiendas que una investigación va en contra de una persona pero esta no figura formalmente como investigada, esta persona no puede plantear una tutela de derechos. Ante estas problemáticas encontramos diferentes estudios que guardan relación con nuestro enfoque, tanto desde un punto de vista nacional como internacional; al respecto contamos con los siguientes.

### 3.1.1 Antecedentes Internacionales:

En referencia a los antecedentes internacionales, respecto a la etapa de instrucción inicial, es decir, de investigación preliminar, debemos conocer que, en estas dos últimas décadas, se ha llevado a cabo un reajuste en América Latina de los respectivos Códigos Procesales en especialidad Penal, que ya veníamos mencionando. Como inferencia de ello podemos percatarnos de una tendencia a modificar o de sustituir el tradicional sistema inquisitivo, encaminando el sistema penal por las vías de un estado Democrático, esencialmente, un estado garantista y respetuoso de todos los DD.HH. reconocidos.

Estos cambios, implementaron la inserción de los principios reconocidos en la constitución dentro del desarrollo del proceso penal, coincidiendo con el desarrollo de los principios democráticos, en conclusión, la persona investigada tiene garantizado el derecho fundamental de su defensa, pero no en cualquier momento aleatorio de la investigación, sino desde el inicio de esta hasta concluir el proceso.

Un importante antecedente normativo internacional es la Convención Americana de los DD.HH. o el famoso Pacto de San José N° 4534, donde se reconocieron los principales derechos del ser humano, es decir, derechos que le asisten por su condición de tal y no por su nacionalidad o algún otro aspecto externo. Dentro de este decreto de relevancia internacional y del cual el Perú ha suscrito su adhesión al mismo el 27 de julio del año 1977, tenemos que en el artículo 8 incisos b, c y d, se reconoce la previa contradicción que consiste en poner de conocimiento a detalle al inculpado sobre la acusación, darle el tiempo adecuado y necesario para prepararse y defenderse, así como su derecho a poder plantear su defensa personal o contar con una defensa técnica a elección del particular y poder realizar sus coordinaciones previas; además en el inciso “g” del mismo artículo, se señala que el inculpado no está obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.<sup>2</sup>

En relación al antecedente normativo, tenemos el CASO FERMÍN RAMÍREZ VS. GUATEMALA, donde se tuvo como director del tribunal de la CIDH a Sergio García

---

<sup>2</sup> Convención Americana de los Derechos Humanos – conferencia Especializada Interamericana de Derechos humanos, 22 de noviembre de 1969, San José – costa Rica, entra en vigencia el 18 de julio de 1978.

Ramírez, dictando su resolución decisoria el 20 del sexto mes del año 2005, en dicho caso se realiza por el tribunal un detallado examen de lo que vendría a ser el alcance del concepto de acusación y la influencia directa sobre la defensa como derecho, precisando que la acusación solo puede proceder cuando previamente se cumple con esta garantía, de lo señalado en su párrafo número 67, se desprende que el presunto autor de los hechos tiene derecho a tomar conocimiento de la imputación, esta debe ser clara, detallada y precisa, si bien puede ser modificada durante el proceso por el órgano encargado de la acusación o por el jugador, este no puede atentar contra el derecho de defensa, de ahí notamos la relevancia de este derecho. (p. 45)<sup>3</sup>

Así mismo, contamos con la siguiente jurisprudencia internacional. CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA, Sentencia emitida por el tribunal de la CIDH, a los 17 días del mes de noviembre del 2009, teniendo este tribunal como juez presidente en ejercicio a Diego García Sarán. Al respecto hacen un análisis de la previa y detallada comunicación en el párrafo número 26 en adelante, precisan un punto clave del caso, indicando que el señor Barreto Leiva durante la etapa sumarial había acudido a prestar declaración hasta en tres oportunidades, en las cuales se había omitido especificarle en la calidad en la cual acudía, incluso el mismo estado de Venezuela señaló que cuando citaron al señor Barreto se encontraba en calidad de testigo para que dé su declaración testimonial, alegando que no se le podían notificar cargos que no pesaban en contra suya. Ante esta precisión, es clara y relevante el pronunciamiento del tribunal internacional, en su párrafo 28 en adelante, indica que el estado debió no solamente indicar la causa de la acusación, sino también las razones por la que se llega a formular la acusación, los fundamentos probatorios, sus características y la calificación del hecho, con el fin de que se le posibilite al acusado ejercer eficiente y plenamente su defensa, en observancia del artículo 8 inciso b del Pacto de San José; así mismo, observa que se ha dejado abierta la posibilidad que el inculpado mientras está en un determinado proceso, pueda verse afectado en sus derechos por acciones de las autoridades que no le son de conocimiento o los que

---

<sup>3</sup> Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos – 20 de junio del 2005.

están fuera de su control u oposición, hecho que viene a ser contrario a la Convención. La Corte Internacional en la referida sentencia señala textualmente:

*“En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho de defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo”<sup>4</sup>(2009)*

### **3.1.2 Antecedentes Nacionales:**

Dentro de nuestro sistema penal peruano, también ocurrió ese gran salto, pasamos del sistema inquisitivo hacia un novedoso sistema acusatorio garantista; en principio teníamos el Código de los Procedimientos Penales de los 40, en el cual se podía observar un sistema mixto, pero lo más notorio era que el Juez disponía actos de instrucción, dotándose este sistema un resaltante carácter inquisitivo, gozaba de muchas atribuciones en su desarrollo, hasta de facultad decisoria, circunstancia que implicaba desigualdad de oportunidades y defensa.

Posteriormente se implementa una reforma al cuerpo normativo procesal penal, al instalarse el Nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, reforzando un sistema garantista, sobre este nuevo sistema indicaron CACERES JULCA & IPARRAGUIRRE (2005), que encaja al proceso penal dentro del modelo de un Estado de Derecho, con carácter social y democrático, tomando al individuo no solo como elemento de la sociedad, sino como el fin de la misma; este modelo al inclinarse a la protección de los derechos inherentes al hombre, evidencia que ha recopilado los elementos propios e intrínsecos de un modelo adversativo, garantista y acusatorio, a fin de garantizar el efectivo respeto y garantía de los principios fundamentales ya

---

<sup>4</sup> Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Corte Interamericana de Derechos Humanos – 17 de noviembre del 2009.



reconocidos incluso a escalas internacionales, como la igualdad de armas, presunción de inocencia, contradicción, etc. (p. 21)

MIRYAM GONZÁLES ZÚÑIGA, alcanzando el grado de doctora, en su tesis de posgrado titulada “LA GARANTÍA PROCESAL DEL DERECHO A LA DEFENSA DURANTE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA: UN ANÁLISIS A LA ACTUACIÓN DE LOS ABOGADOS Y MAGISTRADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA”, del año 2018 – Universidad Nacional Federico Villareal, cuyo objetivo central del trabajo de investigación era establecer las medidas en que se desenvuelven las garantías procesales que protegen el derecho a la defensa durante la etapa de investigación, preliminar y preparatoria, como población seleccionó a operadores del derecho como magistrados o abogados de Lima, sobre los que aplicó herramientas metodológicas, entre ellas se tuvo la entrevista y la encuesta, así como la comparación con el marco normativo; obteniendo diversos resultados, concluyendo que hay una relación directa entre garantizar el derecho de defensa en las investigaciones con la proporción o medida en la que los operadores del derecho apliquen efectivamente las normas concordantes a la carta suprema del Perú. (p. 86)

COCHACHI ALVAREZ (2020), con el objetivo de obtener el grado académico de maestro, en su tesis de posgrado titulada “LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN EL PROCESO PERUANO, PROBLEMAS Y SITUACIONES DE AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES”, en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Escuela de Posgrado Derecho Penal y Procesal Penal, buscó determinar la importancia que se debe dar a la manera de llevar las investigaciones preliminares a cargo del Ministerio Público, mismas que deben llevarse de manera adecuada y de la mano con las garantías legales, así como las garantías constitucionales recogidas en el Derecho Positivo de nuestro estado y reconocidas mundialmente en acuerdos internacionales; su investigación se desarrolló en la población del Distrito Judicial de Pasco, teniendo en cuenta jueces y fiscales en materia penal del distrito, así como operadores del derecho especializados en la materia, sin dejar de lado a ciudadanos comunes entre hombres y mujeres; se emplearon las técnicas de recolección de información como la encuesta, coleccionando cuestionarios de preguntas, para contrastar la hipótesis de su trabajo, así mismo empleó el análisis de documentos; obteniendo como resultados

principales, que en distintos casos de investigaciones preliminares se pudo detectar vulneración a derechos como el de defensa pese a que incluso en esta etapa preliminar la norma señala claramente que en todo el proceso, y no se toma en estricto solo con la formalización, sino que desde las investigaciones preliminares se debe seguir un camino de respeto y garantista para con los derechos de los sujetos investigados. (p. 104)

En ese sentido, dentro de nuestra jurisprudencia nacional, tenemos la SENTENCIA CASATORIA N° 318-2011 emitido por la SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con fecha 22 de noviembre del 2011, ante el recurso de apelación de la Quinta Fiscalía Superior Penal Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima; dicha sentencia señala en su punto 2.8, que las diligencias preliminares tienen tres finalidades básicas, la primera es el de realizar las diligencias con carácter urgente dirigidas solo a determinar si los hechos que se han denunciado son verídicos y de ser así, si es que calzan o no dentro de algún tipo ilícito perseguible; como segunda finalidad resalta el asegurar la escena criminal y las evidencias sensibles que se encuentren; en tercer punto se describe en la sentencia, el de individualizar al presunto imputado fundamentalmente. (p.6)

LA SALA PENAL NACIONAL DE APELACIONES ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS COLEGIADO (2019), respecto al Expediente N° 00047-2018-2-5201-JR-PE-03; teniendo como jueces superiores a Salinas Siccha, Angulo Morales y el Dr. Guillermo Piscoya, parte de nuestra alma mater; mediante Resolución Número Dos del 28 de enero del 2019, ante el recurso de apelación interpuesta por la Representante de la Fiscalía Provincial Especializada en Crimen Organizado del Callao, contra resolución emitida por el Tercer Juzgado de IP que resolvió fundada la solicitud del recurrente sobre tutela de derechos que presentó la defensa técnica del investigado José Carlos Isla Montaña; la Sala planteó como problemática jurídica a resolver, el determinar si con la declaración de reserva de la investigación preliminar se restringió el derecho defensa del imputado Isla Montaña al no permitirle conocer la disposición que contiene la imputación y sus elementos de convicción, como sostiene la defensa o en caso contrario si se actuó ajustado a derecho como señala la Fiscalía. La Sala en sus

fundamentos tercero y cuarto precisan que es claro que nuestro sistema le reconoce a toda persona investigada o imputada, determinadas garantías procesales que le permiten ejercer su derecho de defensa desde el inicio de la investigación, y para ello es primordial que el investigado sea informado de forma oportuna sobre los cargos inculpativos, formulados en su contra, pues el previo conocimiento se regula en el art. 8.2 – b de la Convención de DD.HH., así como en el art. 9 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dentro de nuestro ordenamiento en la Carta Magna del 93 en el art. 139 incisos 14 – 15 , también reconocido claramente en el art. IX del TP y en el art. 71 inciso 1 del código adjetivo penal. Resalta además en su fundamento Séptimo, que este derecho tiene tanta importancia que el proceso solo se llega a materializar si previamente el imputado tiene la información de la imputación sustentada. Por todos esos considerandos y más, resuelve la Sala confirmando la Resolución Número Dos del 15 de diciembre del 2018 emitida por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria<sup>5</sup>. Pronunciamiento de la Sala que ampara la hipótesis de nuestra investigación, respecto a la importancia del derecho de defensa de la persona desde que es investigado, independientemente de si este, figura o no formalmente como tal. (p. 8-14)

## 3.2 BASE TEÓRICA

### 3.2.1 Generalidades del Proceso Penal:

CALDERÓN & ÁGUILA (2008), señalan que es medio empleado en el ámbito penal como una herramienta para realizar una secuencia de actos procesales, en este caso es el Estado representado debidamente por las instituciones competentes, que le permiten ejercer la facultad de usar la *ius puniendi* frente al quebrantamiento de una norma pasible de sanción penal. (p. 149)

El Proceso Penal, se vincula con una finalidad de atribución, pues se encuentra en orientación a buscar la correcta determinación de los hechos y elementos concretos que permita estructurar una imputación sobre el investigado, es decir, atribuir la

---

<sup>5</sup> Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Expediente N° 00047-2018-2-5201-JR-PE-03, de fecha 28 de enero del 2019.

comitiva de una conducta antijurídica penalmente, se dirige a determinar en cuanto si el estado de desvalor, afectación o puesta en riesgo del bien tutelado, se encontraba en la esfera de dominio u organización personal del investigado, asumiendo posiblemente un rol de autor o partícipe. (ALONSO CABRERA, 2009)

ALSINA (1963) nos precisa de manera general, el derecho adjetivo penal es el conjunto de normas que enmarcan la actividad jurisdiccional, con la correcta aplicación y ejecución de las leyes de fondo o sustantivas; es así que su estudio no solo abarca cómo es que se ejecuta el proceso penal, sino también la organización del Poder Judicial, la competencia de los funcionarios público que lo conforman y la actividad de los sujetos procesales, como el juez y las partes dentro del proceso.

Hablando específicamente de este derecho adjetivo penal, se puede concluir que es la compilación de normas legales vinculadas al derecho público interno que norman el proceso, cualquiera que sea de carácter penal, desde su comienzo hasta su culminación.

La reforma en el código adjetivo penal y su sistema en el Perú, constituye esencialmente una respuesta coherente y sistemática frente a lo que fue una clara y urgente necesidad de adaptación del sistema al contexto de la realidad social actual. ROBLES SOTOMAYOR (2017) precisa que una de las razones de la reforma fue esta necesidad de adecuar el sistema legal a la seguridad y reconocimiento que buscaban los tratados en favor de los derechos fundamentales, como la Declaración Universal de los DD.HH., el Convenido de América de DD.HH., así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin dejar de lado nuestra norma suprema, marcando una división de roles en comparación que el anterior sistema penal, delegando la persecución del delito del Ministerio Público. Este autor acota algo muy preciso, que cualquier sistema procesal va cambiando, pues van moldeándose a la evolución de la realidad social que gana niveles de madurez política.

Para su aplicación, se parte de un sistema progresivo, dando pie al Código Procesal Penal que conocemos actualmente, que instauró cambios significativos en la estructura y concepción del proceso penal, a lo que se encontraban adaptados jueces, fiscales y abogados, actores del sistema judicial. (FALLA, 2013).

La función del derecho procesal penal, es la de investigar, determinar y sancionar, cuando sea requerido, las acciones u omisiones que configuran un delito, para ello va a observar y analizar cada caso, indagar e investigar si se requiere, con el propósito de continuar con el orden público.

SÁNCHEZ (2004), señala de manera general y en términos simples, que el proceso en materia penal es el concurso de normas jurídicas que direccionan la actividad procesal e instrucciones jurídicas sobre el ejercicio del Derecho Penal.

### **El espíritu del Derecho Procesal Penal:**

- En esencia, el Derecho Procesal Penal, busca que en todos los procesos penales se lleve con una característica transparente y en un tiempo oportuno, definiendo bien los papeles de cada uno de los intervinientes en el proceso; ¿con qué fin?, con el fin de poder brindar, tanto a ciudadanos peruanos como extranjeros residentes en nuestro país, la posibilidad de acceder a efectiva administración de justicia, un proceso justo y rápido, donde los pasos y etapas, incluyendo la fase de investigación preliminar, se han seguido con el respeto y las garantías correspondientes de los principios y derechos, cuyo objetivo es esclarecer lo que se discute y se logre probar en juicio.

### **Fundamentales Características del Derecho Procesal Penal:**

- Disciplina autónoma de especialidad jurídica, con terminología propia, no se encuentra subordinada bajo alguna otra disciplina.
- De acuerdo a los parámetros relativos a la acción penal, determina la jurisdicción a la cual deben acceder los particulares agraciados a través del Ministerio Público.
- Se establecen los pasos y procedimientos procesales, el desarrollo de las etapas, preliminares y formales, la verificación del hecho prohibido mediante el acopio de elementos que guardan en sí información directa con el delito que permiten coadyuvar con la determinación de la responsabilidad criminal, se establecen las formas de aplicación de las medidas de seguridad adecuadas y razonables para cada conducta prohibida.

- Regula cómo deben proceder las partes dentro del proceso, establece las facultades y obligaciones del juzgador, el persecutor del delito, el agraviado y el investigado o imputado, así como la actividad que puede empelar su defensa técnica. Aparte de los sujetos procesales, también establece los criterios de acción para los auxiliares, terceros intervinientes, las tareas de la Policía Nacional en orientación a brindar apoyo al MP dentro de la investigación.
- Establece el rol correspondiente de cada sujeto del proceso, en afinidad con las leyes orgánicas de las instituciones respectivas.

### **3.2.2 El Derecho Procesal Penal y su Constitucionalización:**

El Perú cuenta con una carta magna que regula una cadena de derechos y a su par una lista de principios que encaminan o direccionan la actividad jurisdiccional, siendo estas esencialmente garantías de una correcta administración de justicia, donde específicamente sobre su sistema penal y todo lo que conlleva, precisa las marcadas cualidades acusatoria, garantizadora y adversativa (RODRÍGUEZ HURTADO, 2006); algunas de estas garantías y derechos en relación al proceso en materia penal, se tiene el art. 2 inc. 24 de la Norma Suprema, y mayor precisión en su artículo 139°, recalcando de los siguientes aspectos sobre la función jurisdiccional:

- Ninguna persona podrá ser exonerado de la jurisdicción que establece la ley ni apartado hacia un procedimiento diferente a lo predeterminado en la norma. (inc. 3)
- No se puede juzgar a un individuo bajo órganos de excepción o comisiones al efecto cualquiera sea la denominación que tomen. (inc. 3)
- Los procesos son públicos salvo que la ley disponga lo contrario. (inc. 4)
- En ningún supuesto, ni condición excepcional, ni en ningún estado del proceso, la persona puede ser privada de su derecho de defensa. (inc. 14)
- Todo individuo debe ser notificado de forma inmediata y con la formalidad escrita de la razón o causa de su detención; adicionalmente tiene la facultad de contactar de forma personal con el abogado de su elección para su defensa y asesoría legal. (inc. 14)
-

Si bien los principios que se amparan en estos artículos son diversos, considero que debo detallar los relevantes que coadyuvaron al desarrollo y conclusión de este trabajo de investigación.

### **3.2.3 Principios del Derecho Procesal Penal dentro de la Constitución:**

#### **a) Tutela Judicial**

Derecho previsto en el artículo 139° inciso 3 de la Constitución Política del Perú, es aplicado durante el desarrollo de todo el proceso, se manifiesta en cuatro aspectos (ROBLES, 2017):

Primero, sobre el derecho a acceder libremente a la jurisdicción, que viene a ser la posibilidad de recurrir al órgano competente del Poder Judicial para solicitar el amparo de una pretensión y dar pie al inicio de un proceso, o en su defecto, el poder acceder a un proceso en curso y someterse a la administración de justicia, en este último contexto podemos encontrar a los actores civiles, los terceros civiles. En relación al imputado, se garantiza además de su derecho a acceder al proceso, la tutela de sus derechos en el proceso, no solo desde la formalización sino además desde momentos previos, como ejemplo, desde la intervención policial y la instrucción que está a cargo del MP.

Segundo, el acceso libre a la pluralidad de instancias en el proceso, lo que concierne a la garantía del derecho a plantear impugnación a una resolución judicial, ello implica además poder ingresar al acceso jurisdiccional de pluralidad de instancias al igual que la primera vez y en las mismas condiciones del derecho inicial, pese a no haber sido la parte que impuso el recurso impugnativo se puede acceder efectivamente a la nueva instancia, claro está que lo requerido es que debe tener un legítimo interés en el resultado del proceso.

Tercero, el acceder u obtener una resolución motivada en hecho y derecho que concluya todo el proceso, esto es específicamente, la fundamentación escrita de las decisiones judiciales en las instancias, exceptuando los autos de mero trámite; debe haber la precisión literal de la norma aplicada y los

fundamentos de hechos con análisis en lo actuado y que son base para tomar la decisión final. Este aspecto, es una ramificación de la tutela judicial que se envuelve sobre el derecho de defensa, la cual se vulnera de distintas maneras de presentarse una absoluta falta de motivación, o que la misma devenga en aparente, insuficiente o imprecisa.

Cuarto, derecho de ejecución, o de manera traducida, a la efectividad de la tutela judicial. El fin inmediato del proceso, es la aplicación de la sanción correspondiente al autor responsable del delito, esta potestad punitiva es exclusiva del estado y no le corresponde al particular buscar la ejecución de esta facultad; diferente es en el caso de la ejecución de una sanción civil (reparación civil), en este caso el particular que tiene interés en el proceso tiene la facultad de poder constituirse en actor civil, posición en la que buscará que se le reconozca como merecedor de un resarcimiento ante el daño o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, y de imponerse el pago de una reparación, este buscará la ejecución efectiva del mismo, para ello el agraviado tiene las herramientas legales para conseguir el cumplimiento de lo ordenado en sentencia.

#### **b) Derecho al debido proceso:**

En sintonía con la tutela judicial, este derecho también se encuentra amparado en la carta suprema, inciso 3 del art. 139, en este derecho se asoman las garantías, libertades y derechos propios a la persona dentro de un estado democrático social de derecho. Su ámbito de aplicación en el proceso penal, aparte de reconocer los valores de justicia y equidad, le da el carácter constitucional a garantías que no se encuentran consagradas literalmente en la Constitución, pero la finalidad sigue siendo el de garantizar que todo proceso sea acorde y justo con los objetivos de la propia norma suprema; este derecho y su aplicación se manifiesta de diversas formas, puntualizaremos las más importantes (ROBLES, 2017):

Primera manifestación, non bis in ídem – la inadmisibilidad de una multi – persecución, lo que consiste en una prohibición de una persecución contigua sobre una misma imputación cuando esta ya ha sido objeto de sentencia o



resolución final que concluye el proceso, así mismo, ello involucra además que ninguna persona debe ser procesada en dos vías procesales diferentes por el mismo hecho.

Segunda manifestación, derecho a un proceso no dilatado indebidamente, como su descripción lo refiere, es el derecho que garantiza que el proceso penal debe llevarse a cabo y se culmine sin que medien retrasos que afecten de manera indebida su trámite. Tiene un fuerte arraigo con el principio de celeridad procesal, por ello su importancia se acrecienta en el proceso penal, en razón de la necesidad que tiene la persona (inculpado) de liberarse de las imputaciones en su contra.

Tercera manifestación, el derecho a un juez imparcial. En el sistema procesal penal, aplicado el modelo acusatorio, se toma en cuenta este derecho, pese a ser un derecho obvio, es necesario que esté reconocido expresamente, ello es el fundamento que motiva la pluralidad de jueces.

Cuarta manifestación, la no obligación de declarar o reconocerse culpable, es decir, al inculpado, no se le puede coaccionar con el fin de que declare, o lo haga en una determinada manera, ni mucho menos se le puede pedir que reconozca sobre sí responsabilidad penal; el silencio que manifieste el acusado, no puede ser utilizado como fundamento de culpabilidad; por tanto, al acusado no le puede realizar preguntas capciosas o sugestivas, ni menos de tipo amenazantes.

Agregando a lo ya señalado, el NCPP en su artículo 80 menciona que la defensa de oficio como un servicio nacional es administrado por el Ministerio de Justicia, en tanto que tiene la obligación de brindar este servicio a aquellas personas con circunstancias de pobreza o en déficit de recursos para poder designar a un abogado particular; pero adicionalmente precisa, que también se puede establecer un abogado defensor de oficio, cuando se dé la indispensabilidad de uno ante la necesidad de resguardar la legalidad y debido proceso en el desarrollo de una determinada diligencia.

### **c) Presunción de inocencia**

Esta garantía es una de las más importantes dentro del proceso penal, se trata de considerar inocente a la persona que viene siendo objeto de investigación y acusación, ello mientras no se demuestre su culpabilidad, el levantamiento de la presunción de inocencia solo se logra con el pronunciamiento del órgano judicial mediante una resolución – sentencia, que lo condene declarándolo culpable o responsable del hecho o comportamiento delictivo, mientras esta sentencia no se emita, no se le puede considerar culpable (Stumer. 2018).

### **d) Derecho de defensa**

Como todos conocemos, es el derecho constitucional que ampara a todo individuo que tenga un interés sobre el resultado de una resolución de un proceso, ello le permite comparecer a los órganos policiales, fiscales y judiciales que intervienen durante la etapa preliminar y las etapas propias del proceso penal; hay que tener en claro, que este derecho de defensa, no solo es extendido hasta el imputado, sino a todos los sujetos que intervienen.

El profesor GUARDIA (2016) con relación a este derecho expresa que es un requisito de validez para el desenvolvimiento del proceso, así como la aplicación válida de una pena, en virtud de los titulares del derecho, podrán hacer valer las pretensiones que plantean en función a los derechos subjetivos que quieren resguardar.

FASANANDO, señala que el derecho de defensa tiene naturaleza constitucional, formando uno de los pilares del sistema y modelo jurídico peruano, para que se pueda alcanzar una plena efectividad en el ámbito de este derecho, se debe contar con características específicas como la idoneidad, calidad y compromiso con los intereses de la persona, intereses que son defendidos por los profesionales en Derechos, y deben ser respetados por las autoridades. (Fasanando, 2020).

El derecho de defensa se manifiesta en la realidad, concurriendo una serie de requisitos para que sea efectivo, constitucionalmente se garantiza y previene que una persona se encuentre inmersa en un proceso que la vulnere o la

coloque en un estado de indefensión frente a omisiones o actos que pueda desplegar un determinado órgano jurisdiccional.

Su aplicación y manifestación se pueden observar de diversas formas, las cuales solo también considero relevante puntualizar las siguientes:

Primero, la asistencia de un abogado defensor, consagrado dentro del artículo 139° inciso 14 de la Constitución Política, este derecho debe ser amparado y garantizado durante toda la etapa del proceso penal, incluso dentro de las diligencias preliminares y actividades iniciales de investigación de la policía.

Segundo, el no ser juzgado en ausencia ni condenado sin un previo proceso judicial, ello es claro porque en principio, sin juicio el imputado no tendría la oportunidad de ejercer su defensa, así mismo, si del desarrollo del juicio el imputado no compareciere y pese a estar solo presente su abogado, y el proceso continuare sin este, no podría ejercer su defensa material ni confirmar que tenga una defensa técnica justa, ni mucho menos podría cambiar de abogado cuando lo considera pertinente, en este caso, cabe que el juzgador suspenda la audiencia y la reprogramme con la finalidad de que no se vulnere ningún aspecto antes referido.

Tercero, la aplicación de la ley más favorable al reo, esta figura es una excepción ante el principio de la irretroactividad de las leyes; implica que, en caso de duda o conflicto entre leyes aplicables en materia penal, se debe optar por seguir la más favorable al procesado.

Bajo ese orden de ideas, el TC aporta jurídicamente a su precisión, señalando en el Exp. N° 582-2006-PA/TC, que toda persona sobre la cual pese un proceso de investigación donde los derechos e intereses que se discuten sean suyos, tiene la garantía condicional que no puede quedar en indefensión y debe tener la posibilidad de argumentar y/o justificar el reconocimiento de estos intereses y derechos.

Por lo tanto, la defensa de la persona, sea cual fuere su posición en el proceso, no debe ser imposibilitada, sino que debe garantizarse por el resguardo de sus

intereses; en resumida cuenta, ningún individuo puede ser exonerado de la representación legal en el proceso, a un abogado que lo ayudará en el entendimiento de las leyes, además de ser su camino en la lucha de sus intereses y defensor de sus derechos.

### **3.2.4 Los Principios del Nuevo Código Procesal Penal**

Los principios llegan a configurarse como herramientas jurídicas, en caso de vacíos o deficiencias de la ley, participan de manera supletoria, que coadyuvan al juzgador a tomar una decisión. Tienen la función de orientar cuando se presenta una incertidumbre en la norma procesal. (Monrroy, 2007, p. 170)

Es decir, que los principios llegan a ser líneas directrices que orientan y limitan a los actores procesales, las decisiones del juicio, su inicio, desarrollo y finalización, al ser estos considerados en el Derechos Positivo, llegan a obtener el carácter de norma rectora o reguladora, al haber sido plasmados literalmente en un cuerpo legal, como pasa en el código adjetivo de materia penal:

#### **a) Legalidad:**

Ana Calderón, atribuyéndole la denominación de principio de discrecionalidad, explica que, en base a él, los operadores jurídicos están sujetos a actuar bajo las normas estatales y, sobre todo en respeto de la Constitución (2007). Entonces, tanto el fiscal, la policía y los mismos magistrados, deben cumplir respetando las garantías establecidas en la norma y las garantías constitucionales de nuestro país.

Con este principio, nos menciona Montero (2014), que sirve como limitador a la facultad *ius puniendi* del Estado para imponer condenas, ya que le exige el respeto y cumplimiento de lo señalado en las normas, se aduce que tanto el hecho perseguido o investigado y la sanción que se haya o pretenda imponer, deben encontrarse reguladas en la norma jurídica, ninguna persona merece ser investigada o condenada al margen de lo que la ley indique.

Este principio es tan importante que incluso es un filtro ante la iniciación del proceso, pues primero invita al persecutor penal a evaluar si debe iniciar investigación sobre determinado hecho, y para ello este debe encontrarse regulado, posteriormente protege al individuo durante todo el proceso penal ante cualquier arbitrariedad, o que se le exponga a una intervención excesiva.

Para ser más precisos, este principio se constituye como una regla imperativa sobre la competencia establecida por cuanto se pone en oposición tajante ante todo acto contrario a la norma. El estado y los poderes constituidos están llamados a cumplir con una política de fidelidad, que se respete la legalidad constitucional y que cada organismo o poder debe actuar conforme las atribuciones consignadas en la ley. (Islas, 2009, p. 100).

SIMAZ, (2014), acota señalando que la punición arbitraria es prevenida por este principio, todo imputado debe ser protegido contra una sanción en base a normas imprecisas o retroactivas que lo perjudiquen; es decir, la protección que el Estado debe ejercer en favor de todo individuo, si bien se realiza mediante el dictado de normas jurídicas, éste debe procurar que estas mismas normas no perjudiquen posteriormente a los individuos que se ven sometidos a las mismas. ¿Y cómo regula ello?, regulando los lineamientos que limitan el uso de la potestad punitiva, lucha y previene contra actos que sean características comunes de estados abusivos, injustos y dictatoriales.

Por lo tanto, en la misma línea que Simaz, el autor Cristobal Tamara recalca que este principio es un criterio fundamental en el núcleo del Derecho Público, principalmente del Derecho Penal, lo reconoce como un parámetro que guía y delimita la facultad punitiva del mismo Estado, moldeándolo como un Estado democrático, regido por el Derecho, en el que la ius puniendi ve su fuente y límites en la propia norma jurídica. (2020, p. 58)

## **b) Transparencia**

Característica resaltante del NCPP que consiste en que toda actuación probatoria, alegatos o acciones procesales, se expondrán oralmente durante la audiencia y en presencia del juzgador. En esa idea, podemos indicar que lo no actuado o discutido

durante audiencia no podrá formar parte del expediente y, por tanto, tampoco se puede valorar o tomar en cuenta para fundamentar la sentencia.

Toda audiencia penal es abierta al público, salvo determinadas excepciones, se registra en dispositivos de video y audio; por lo que la posibilidad de que se efectúen actos de corrupción como favorecimientos en el proceso o tratos bajo la mesa, se ve reducido de manera radical. Este principio también se desprende de la obligación del juez para dictar sentencia en audiencia mediante su lectura integral, quedando todo registrado, lo que previene la promoción de actos de corrupción.

#### **c) Igualdad de armas**

Principio marcado den sistema acusatorio adversarial, el órgano jurisdiccional debe garantizar que las partes que intervienen en el juicio o el proceso, deben tener igualdad de condiciones, es decir, poder acceder a las mismas herramientas o medios procesales, no simplemente para aportar prueba sino además pueden participar de forma igualitaria en los demás actos del proceso.

Mejor explicado, se refiere a que este principio abarca la condición homologa de las partes de contar con las medidas necesarias para la defensa y ataque, este principio es una novedad con el NCPP a diferencia del anterior código adjetivo que no lo comprendía y en el cual el fiscal tenía cierta ventaja frente al investigado o imputado y su defensa. Actualmente en la norma procesal vigente señala en el art. I del TP, regula la intervención de las partes en igualdad de posibilidades para ejercer sus derechos y facultades previstos en el código y la norma suprema.

En este caso el juez debe allanar o levantar cualquier obstáculo que dificulte o impida la viabilidad de la igualdad de armas, aportan (Berbell y Rodríguez) que el principio de igualdad de armas reconoce que las partes tienen las mismas posibilidades de defenderse y actuar dentro del proceso penal, y mantener esas posibilidades hasta y durante en el juicio. (2018)

#### **d) Oralidad**

Este principio es fácilmente identificable dentro del sistema acusatorio, es una característica marcada que las audiencias en el proceso penal sean numerosas, en las que prima la oralidad. Este principio implica que todo lo fundamentado, aunque

ya obre por escrito, debe oralizarse en la audiencia donde se actúan los medios de prueba.

Este principio va estrechamente vinculado con el principio de inmediación, pues ello implica la iteración humana directa, permitiendo un mejor conocimiento y percepción de los hechos materia de juicio.

#### **e) Contradicción**

Principio primordial reconocido en el TP y el art. 356 del CPP, este se manifiesta dentro de la observancia y oposición de argumentos y elementos de prueba que pueden ingresar las partes respecto a distintas cuestiones que se traten en las actuaciones procesales. Este principio tiene una estrecha relación con el derecho de igualdad procesal.

Principio que se encuentra rigiendo en el debate de intereses contrapuesto durante todo el juicio oral, constituyendo que las partes tengan permitido el ser oídas por el tribunal, a poder aportar pruebas, a controlar la actividad de la parte contrincante y a refutar los motivos o argumentos que estos puedan expresar y que considere los perjudique. (Cubas, 2008)

LOUTAYF RANEA, (2011), citando a Couture, y atribuyéndole principio de bilateralidad, señala que el principio de contradicción implica que toda pretensión planteada por alguna de las partes, debe ser transmitida o puesta en conocimiento de la parte contraria para que sea evaluada por esta y plantee lo que considere pertinente, como una oposición de ser el caso. (p.58)

#### **f) Inmediación**

Al respecto, Cuba (2008) nos da mayor alcance de este principio, precisando que es la interacción directa del juzgador con las partes y los demás elementos del proceso, esto es la actividad probatoria que le será de utilidad para emitir sentencia; a esto se le complementa el principio de contradicción, que impide que el encausado pueda ser juzgado en ausencia.

Este principio se justifica en tanto que la participación del juez coadyuva con la eficiencia de las resoluciones, por cuanto la decisión se determina sobre los

elementos probatorios aportados y actuados en el proceso. Beneficiándose el juzgador con poder acceder a información importante y no solo lo precisado en argumentos, sino que es testigo directo de las actitudes y reacciones de las partes u órganos de prueba, lo cual le sirve para dotar un valor agregado a la prueba y finalmente emitir sentencia.

#### **g) Garantismo**

Con la reformulación del código adjetivo penal, fue necesario un cambio en la rutina y mentalidad de jueces y fiscales como principales actores del sistema judicial, dentro de estos cambios tenemos que se dejó de lado que el investigado o acusado es responsable per se del hecho que se le imputa, ante ello se replanteó esta percepción pasando a primar su inocencia hasta que se compruebe lo contrario.

El NCPP si bien adopta en gran rasgo las mismas garantías que el anterior código, logró la materialización e instauración preventiva de las garantías procesales, como el pleno ejercicio de defensa del imputado y en caso de ser objeto de sanción, no se alegue una motivación insuficiente o se le prive del pleno ejercicio de algún derecho procesal que pueda constituir la nulidad del proceso.

Esta garantía de inviolabilidad del ejercicio de defensa procesal, reconoce que las partes deben poder acceder al proceso sin ninguna obstrucción, a poder interponer los recursos que la norma confiere ante un tribunal independiente, imparcial y objetivo, esto durante todas las fases o etapas procesales y las instancias jurisdiccionales; de igual forma consiste en que debe pretender que el imputado se halle en condiciones para poder rechazar la acusación, o incluso, incorporar otras cuestiones que puedan neutralizarla o amenorar su gravedad, siguiendo la ley penal. En ese aspecto, el Estado debe eliminar toda posibilidad que alguna persona sea juzgada sin que se defienda o sea oída en juicio, de lo contrario se estaría incurriendo en un estado de indefensión prohibida por la constitución. (Maier, 2004)

De otro lado, pertenece inherentemente a las garantías de defensa procesal, el derecho a controlar la prueba y de probar, al respecto VIVAS USSHER (1999), el



encausado posteriormente a permitírsele ser escuchado respecto de los hechos, su afirmación o negación, de garantizarse que tenga la oportunidad u posibilidad de probar su inocencia o la falta de fundamento en la acusación.

### **3.2.5 Etapas del proceso penal – conceptos generales**

#### **a) Etapa de Investigación Preparatoria:**

Esta es la etapa inicial del proceso penal, no obstante, cabe señalar que existe una subfase previa que se denominada Diligencias Preliminares, esta es previa a la etapa formal de la Investigación Preparatoria.

Esta fase preparatoria puede ser iniciada en mérito de una denuncia, que es la puesta en conocimiento de la *notitia criminis* por la misma parte agraviada o por terceros, por la policía o por el mismo MP al conocer alguna nota periodística. Conforme el art. 334 inc. 2 del CPP, esta etapa presenta la subfase de diligencias preliminares, que como máximo puede tener una duración de 60 días, en los casos de detención, es el mismo representante del MP quien determina un plazo dependiendo de la complejidad y características del hecho.

La sub fase de diligencias preliminares, presenta una actividad de investigación mayormente realizada por el cuerpo policial en apoyo a la Fiscalía, en sentido que estos actos se destinan a la determinación de información precisa sobre el hecho como el lugar, el modo y consecuencias directas del hecho, así como la individualización de los posibles responsables, lo que permitirá evaluar si efectivamente se trata de un delito; también se encuentra a cargo de esta subfase, el realizar actos urgentes e inaplazables. Consecuentemente, si el Fiscal luego de dichas actuaciones procede a formalizar la fase de investigación preparatoria, podrá realizar las respectivas diligencias de investigación, dentro de lo que señale la ley procesal, como el modo y sus límites. Lo efectuado dentro de la fase de preliminares, no puede repetirse dentro de la fase de investigación preparatoria ya formalizada.

Una vez formalizada la etapa preparatoria, se da la suspensión del curso de prescripción de la persecución penal, y el Fiscal de considerar o pretender archivar el caso, no podrá hacerlo sin la intervención judicial. El fiscal podrá disponer la concurrencia del imputado, agraviado, testigos y otras personas que tengan la

posibilidad de informar circunstancias que coadyuven con la investigación. Luego de todas las actuaciones de investigación que le son pertinentes para el fiscal, si se ha recabado material relevante que le permita al fiscal sustentar una tesis delictiva concreta, se procederá a emitir el requerimiento acusatorio y por tanto la culminación de la etapa de Investigación Preparatoria.

**b) Etapa Intermedia:**

En esta etapa, se centra en la decisión que ha tomado el Fiscal, luego de haber culminado la fase de investigación, estas pueden ser dos; la petición de sobreseimiento de la causa, que se refiere a la abstención de la acción penal, evitar el proceso penal y el imponer una pena; o puede el Fiscal continuar con el planteamiento de su acusación, en el cual seguirá con el proceso y presentará los medios de prueba pertinentes para probar su teoría del caso.

El sobreseimiento puede solicitarse cuando el Ministerio Público haya corroborado lo siguiente:

- La no existencia del hecho delictivo
- El hecho se le puede atribuir al imputado
- El hecho es atípico
- Existe causal de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad
- La extinción de la acción penal
- No hay se haya podido recopilar o recabar datos nuevos a la investigación
- Falta de elementos de convicción

Si el persecutor del delito dispone formular acusación, el juez de IP, convocará a una audiencia de control de acusación, en el que se debate la procedencia o admisibilidad de los puntos planteados, así como la pertinencia de la prueba que se ha presentado. Para desarrollar esta audiencia se necesita la presencia del abogado defensor y el titular de la acción, en esta etapa no se actúan los medios de prueba, sino que el juez de IP puede plantear algunas observaciones sobre imprecisiones o defectos en la

acusación, también sobre excepciones, la admisión de los elementos de prueba y de ser el caso, convenciones probatorias.

De requerir la acusación un reiterado análisis o precisión por parte del MP, el Juez dispone la devolución de la acusación y suspende audiencia para que en el plazo de cinco días pueda subsanar el defecto, luego se retoma la continuación de audiencia.

Posterior a ello, el juez a cargo del control de la IP, dicta auto de enjuiciamiento en la que se pronuncia la admisión de lo solicitado por el titular de la acción, sobre someter al imputado a juicio oral, de ser necesario además puede establecer medidas de seguridad o coerción sobre el imputado para garantizar la continuidad del proceso a la siguiente etapa, y finalmente para establecer la citación al juicio oral, pasa a cargo del juez penal emitir auto de citación a juicio.

**c) Etapa de Juicio:**

Esta es la etapa principal de nuestro Código Procesal Penal, en esta fase quien dirige el debate es el juez penal, controla los momentos de participación de las partes, el fiscal tiene la función de sustentación de la acusación y la defensa del inculcado señala sus pretensiones de defensa. El proceso de juicio oral, consiste en el debate de la responsabilidad o inocencia del imputado en base a la actuación de elementos probatorios que serán valorados para emitir la sentencia que corresponda.

Esta etapa, como se dijo, se realiza en base a la acusación, se rige por los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, aquí se debe concurrir tanto la presencia del imputado como de su abogado defensor.

Esta etapa comprende:

- La instalación de audiencia de juzgamiento
- La presentación de los alegatos iniciales, es decir, lo que las partes demostrarán en juicio
- La actuación probatoria, esto es tanto testimoniales, exámenes periciales y actuación documentaria.

- De requerirlo el imputado puede realizar su manifestación libre de los hechos.
- Al culminar se exponen los alegatos finales ante el juez, en base a lo actuado en juicio.
- Consecuentemente, el Juez valorará todo lo actuado y emitirá sentencia motivando su decisión.

### **3.2.6 Las Diligencias Preliminares en los casos de Corrupción de Funcionarios:**

Toda investigación penal se inicia en mérito de la puesta en conocimiento de la comisión de un presunto hecho delictivo, art. 326 del CPP, esta información puede venir de cualquier persona, la policía o incluso funcionarios públicos. Es así que, por lo propio de los delitos de corrupción, esta información circula a niveles de relaciones de servidores y/o funcionarios públicos o instituciones del Estado. En ese sentido, lo que corresponde realizar una vez tomada en conocimiento la información de un presunto hecho prohibido, es iniciar la fase preliminar, que es la ejecución de actos inaplazables y urgentes, orientados a establecer si efectivamente concurrieron los hechos denunciados y si configuran o calzan en los tipos penales descritos en la norma, corresponde resguardar los elementos materiales encontrados productos de su comisión y el individualizar a las personas involucradas contra quienes se dirigirá la investigación.

El Ministerio Público, apenas tenga conocimiento del hecho delictivo o sospecha y no teniendo la identificación de los posibles responsables o participantes del crimen, debe inmediatamente disponer a la PNP ejecutar las averiguaciones pertinentes para individualizar a los presuntos responsables, de conformidad con el art. 334 del CPP numeral 3. La obligación de ejecutar diligencias de carácter urgente e inaplazable se resalta en la Casación N° 66-2020 de Puno, que refiere como finalidad de las DP, el realizar estos actos de urgencia y el establecer si se tuvo lugar a los hechos denunciados, reitera que se debe asegurar los indicios materiales y que no solo se debe individualizar a los posibles involucrados, sino también a los agraviados.

Hay, por tanto, la necesidad de establecer los presupuestos formales para dar pie de manera válida a un proceso de investigación luego de la inculpación formal (Sánchez

Velarde, 2013). Los fiscales tienen la tarea de seleccionar los casos de forma óptima y objetiva, se busca evitar la saturación de causas. (Cubas, 2015)

La finalidad de las DP, se regulan bajo el CPP en los art, 330 inciso 2 y el art. 334 inciso 2, por tanto, no es factible la práctica irregular de estos actos de investigación por una interpretación al margen de las previsiones legales. (San Martin, 2015)

En base a lo regulado, es necesario precisar algunas características:

- i. Desde el inicio de las preliminares, implica ello una serie de actuaciones significativas o trámites de investigación dispuestos por el MP, actos que se anteponen al proceso formal y que buscan determinados elementos que permitan tratar de forma sólida una posterior investigación propiamente dicha con la constitución formal en la etapa de investigación preparatoria.
- ii. A partir de la noticia criminal y la disposición de iniciar esta fase preliminar, de no tener una acreditación que asegure una sospecha reveladora, se debe disponer el resguardo de las fuentes materiales que pueden probar el delito, la identificación o determinación de los nombres y apellidos de los presuntos responsables o contra quienes se dirige la denuncia. De corresponder, se debe dar resguardo a los agraviados, impedir que se aparten del proceso.
- iii. Los actos que se desarrollan son de carácter indispensable y urgente, debe ejecutarse prontamente con dinamismo con atención al contexto del caso. Es primordial ejecutar sin mayores dilaciones que pongan en riesgo de pérdida lo que se pretende recabar. Esta etapa se caracteriza por la necesidad de actuar con prontitud o premura.
- iv. Se tiene un plazo específico para llevar a cabo las DP, art. 342 inciso 2 del CPP, sesenta días. El tiempo máximo que puede estar detenido una persona es de 48 horas, salvo casos complejos donde se especificará un plazo prudente. No hay prórroga en esta etapa, pero sí para la etapa formal de IP de tener causas justificadas

Al tener carácter contingente, se da antes de la investigación preparatoria; pero surge la pregunta ¿En qué circunstancia debe instaurarse las Diligencias Preliminares?, en la mayoría de casos se instalan diligencias preliminares sin una razón suficiente o

importante; sino que esta figura es usada para de alguna manera desairar el plazo de duración, pues este plazo de duración es controlado más estrictamente a partir de la Formalización de la Investigación Preparatoria. Se inicia diligencias preliminares con la finalidad cuando no se tengan todos los presupuestos formales para iniciar válidamente el proceso judicial. (Casación N° 03-2019/CIJ 116)

Hay otra situación ligada a otro elemento incorporado en el art. 330 del CP. Penal, pues un rol fundamental que cumplen las Diligencias Preliminares es la correcta individualización de las personas involucradas en la comisión del delito, lo que significa la individualización tanto de los agraviados, como del imputado. En muchos casos, la comisión de un hecho criminal, puede contar con suficientes evidencias para confirmar la concurrencia del delito en sí mismo y el aporte de la identificación del posible autor (es).

Pero en el caso probable que no se pueda determinar desde un principio de tomado conocimiento de un hecho delictivo, como por ejemplo un ilícito de corrupción como el delito de Cohecho, en este caso el fiscal o la fiscal a cargo, debe actuar de manera inmediata y previa para individualizar al presunto responsable, pues no es viable el inicio de la investigación preparatoria contra aquellos que resulten responsables.

Así mismo, la individualización de la persona imputada no es simplemente su identificación, esto último consistente en precisar su nombre, apellidos, edad, sexo, etc., sino también que pese sobre esta persona una sospecha suficiente, sobre todo, una sospecha que amerite el inicio de la investigación.

### **3.2.7 Principales actores del Proceso Penal:**

En principio, los sujetos procesales tienen interés y posiciones diversas por lo que se le conoce que entre los sujetos se mantiene una relación jurídica procesal compleja; toda relación procesal tiene dos aspectos, el material y el formal. El aspecto material se refiere a la relación que se da por la pretensión principal del proceso, imposición de una sanción, de la misma surge la relación entre el Ministerio Público y el inculpado cara a cara con el Juez; y de manera accesoria el resarcimiento por

reparación del daño causado mediante el hecho delictivo, de la que surge una relación que vincula a la parte civil o el tercero civilmente responsable.

Dentro de la práctica conocemos a las piezas principales del proceso como “sujetos procesales”, encontramos en estos al juez penal, al titular de la acción penal o el persecutor del delito (Ministerio Público), y al imputado sobre quien pesa la acusación; estos son los mínimos sujetos procesales con los que debe contar todo proceso penal, pero también pueden aparecer otros de igual importancia, como el tercero civilmente responsable y el actor civil, que tienen vinculación e interés directo con el resultado del proceso. En el 84, GARCÍA RADA ya había hecho una diferenciación, precisando que en el proceso hay protagonistas principales y auxiliares, los protagonistas principales intervienen de una manera directa reflejado en su poder de decisión y en el ejercicio de sus derechos, existe participación plena; los auxiliares son actores secundarios por cuanto no intervienen como los sujetos principales en el proceso, sino que se someten a disposición del mismo como fuentes de información, por ejemplo los testigos, o los auxiliares jurisdiccionales.

Por otra parte, ORE GUARDIA (1993), consideraba que los actores principales son el Juez Penal, el Ministerio Público y el imputado, separando al actor civil y el tercero civilmente responsable dándoles la característica de dispensables o contingentes.

Al respecto, considero pertinente precisar ideas o conceptos generales de los principales protagonistas del proceso penal, a fin de que cualquier lector, pueda orientarse dentro del sistema procesal penal y comprenda el punto problemático planteado.

a) **El Juez:**

El termino Juez provine de las voces latinas “*Ius*” que significa Derecho y “*Dex*” que deriva de la expresión “*Cincex*” que significa vinculator, relacionando dichos términos podemos decir que Juez equivale a *vinculador del Derecho*.

De manera general podemos precisar que es la persona que ejerce la jurisdicción penal, pues se le ha dado la potestad imperativa de aplicar la

administración de justicia en materia penal, actuando en representación del Poder Judicial como un órgano jurisdiccional.

Como lo mencionamos dentro de los antecedentes, anteriormente el juez se encargaba de iniciar el proceso, dirigir la etapa de instrucción y de tomar las decisiones respecto a los asuntos penales pronunciando su decisión mediante resoluciones jurisdiccionales, todo ello se vio dentro del sistema inquisitivo. No obstante, dentro de la nueva norma adjetiva, se determinó una separación de roles con la finalidad de no ver contaminado al juez que tomará la decisión mediante la emisión de la sentencia, con el previo conocimiento de los hechos antes del proceso penal.

Actualmente podemos diferenciar dentro del proceso penal, al Juez de Investigación Preparatoria y al Juez Penal:

- **Juez de Investigación Preparatoria:**

El artículo 29° de del Código Procesal Penal, precisan la competencia de los Juzgados de la Investigación Preparatoria, de los cuales se destaca que este juzgado ejerce un control para el resguardo de los derechos fundamentales, realiza actos de prueba anticipada y atiende los requerimientos de la fiscalía y las demás partes.

Puede imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la investigación preparatoria (Casación N° 328-2012-Ica).

Y lo más resaltante es que conduce la etapa intermedia y se encarga de la ejecución de la sentencia; no obstante, su función ya no es instructiva, es decir, ya no tiene la función de realizar investigación, sino que ello es competencia del fiscal.

Al respecto, el Juez de Investigación Preparatoria, será el garante del respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, pudiendo intervenir en la investigación preparatoria dentro de las potestades que la ley le ha otorgado.



- **Juez Penal:**

El Juez Penal, se encarga del juzgamiento y de las incidencias que surjan en su desarrollo, la participación que tiene es diferenciada en relación a la gravedad del delito.

Cuando la presunta comisión de un delito amerite una posible pena de hasta seis años, el órgano que interviene y tiene competencia es el Juzgado Penal Unipersonal al que el CPP en su art. 28, le confiere determinadas funciones especiales, como el conocer sobre los beneficios penitenciarios, conocer sobre recursos de queda y la corroboración de cuestiones de competencia entre jueces de paz letrados.

Para los delitos que ameriten una sanción mayor a seis años, son competentes los juzgados colegiados, así como también tienen la competencia para conocer sobre acumulación de penas sobre determinado encausado. Adicionalmente, el CPP faculta a la Sala Penal de la Corte Suprema, el conocer sobre recurso de casación contra autos de sentencia. Sumado al art. 27 del CPP que le reconoce a las Salas Penales de las Cortes Superiores, conocer los recursos impugnativos contra autos y sentencias, y resolver sobre las competencias de jueces de IP y penales.

El juez ejerce la jurisdicción cuando tiene capacidad procesal y subjetivas, estas capacidades son establecidas como requisitos por la ley, como el juramento, posesión de cargo, nombramiento y la competencia de poder conocer determinado proceso.

**b) El Ministerio Público:**

En base al artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, se entiende que el Ministerio Público es el encargado del ejercicio público de la acción penal, pesa en sus hombros el deber de reunir la carga de la prueba; asumiendo la conducción de la investigación desde su inicio, además está obligado a actuar con

objetividad. No solo ellos, sino que debe garantizar la igualdad de las partes durante la investigación.

Para el caso de delitos complejos, que es común factor determinante de la investigación en delitos de corrupción, debe tenerse siempre en cuenta las reformas que ha venido instaurando el nuevo sistema de procesos penales. Si bien se ha mantenido la figura de investigación reservada, esto no aplica para las partes procesales, quienes tienen derecho a conocer la información recabada de manera directa o a través de sus abogados. Tampoco puede usarse libremente la categoría de “secreta” en ciertas actuaciones, pues estas solo proceden de manera excepcional ante la presencia de un peligro para la investigación, y la disposición de la misma debe ser motivada por el Fiscal.

Si bien el artículo 65.4 del CPP, establece que el Fiscal debe decidir la estrategia de investigación adecuada al caso, debe coordinar el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la investigación.

- **La imputación:**

En sentido amplio, tal como señala REDONDO ALBERTO (1999), es la atribución someramente fundada que se le atribuye a una persona ser el posible autor de un hecho ilegal o un crimen, es la presunción del hecho y responsabilidad del autor por el hecho denunciado. (pág. 211).

En ese sentido, entendemos que la imputación definirá los hechos que se le atribuyen al imputado, conforme los tipos legales, esto es el proceso de adecuación típica, a partir de la cual surgen los derechos elementales de acusación, defensa y contradicción; ello le permitirá al interesado, interponer medios de defensa técnica, tendientes a cuestionar la validez de la acción penal, así como también el persecutor pueda solicitar ciertas medidas de coerción procesal como también limitativas de derecho.

Al respecto, el art. 8.2.b de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas: b) Comunicación previa y detallada de la acusación formulada”.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3 prescribe algo muy importante, que cualquier persona en calidad de acusada tiene el derecho, sin discriminación alguna, a poder ser informado sin demoras, a sus garantías mínimas, como el ser informado bajo el idioma que comprende, sobre la naturaleza y motivos de la acusación que se formula en su contra.

En el ámbito nacional, tenemos lo regulado en el artículo 139, inc. 14 y 15 que indica ninguna persona puede ser privada a su derecho de defensa cualquiera que sea la etapa en la que se encuentren y segundo, a ser informado de manera inmediata y escrita las causas y razones de la detención que se haya efectuado sobre ella.

En el ámbito jurisprudencial, en el Recurso de Nulidad 956-2021-Ucayalí – Corte Suprema Sala Penal Permanente, precisa que los supuestos de hecho comprendidos en la norma penal, debe contar con el relato fáctico y concreto, debidamente precisado y delimitado sobre la presunta acción de cada uno de los acusados. (Fundamento V de la resolución)

### **c) El imputado:**

Es la persona en quien recae la imputación realizada por el Fiscal, se le atribuye la comisión del delito. En conceptos generales, se le considerará imputado desde el inicio del proceso, hasta la resolución condenatoria o absolutoria y consecuentemente quede firme.

Se le puede conocer con otros términos como encausado, inculcado, procesado y acusado, este último cuando se ha presentado el requerimiento acusatorio. Todo proceso penal, para desarrollarse sin defectos y vicios anulatorios, requiere que el imputado esté debidamente determinado, individualizado como el presunto autor del delito o falta.

Al amparo de lo establecido textual mente por el artículo 72° del CPP, se puede interpretar que desde las primeras actividades donde interviene el imputado, debe ser identificado por sus datos personales o señas peculiares y las impresiones dactilares en la oficina correspondiente, en caso el imputado se rehúse a identificarse o

proporcionar los datos respectivo, o incluso de indicar datos falsos, se procederá con la identificación mediante los medios útiles a disposición o por testigos, pese a que vaya en contra de la voluntad del investigado, los errores que se puedan presentar al consignar los datos, se podrá corregir en cualquier oportunidad.

En este sentido, es indispensable establecer la identificación del inculpado, determinar todos los datos que lo singularizan, diferenciándolo de las demás posibles personas que hayan tenido vinculación directa o indirecta de las circunstancias, por ejemplo, sus nombres completos, documento de identidad, lugar de origen, domicilio, edad, nombre de sus padres, características físicas, etc.

Además de lo precisado, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el imputado o inculpado debe ser individualizado, esto es la determinación de la forma en que presuntamente habría cometido el hecho(s); de ese modo se puede garantizar la persecución penal y la potestad punitiva del Estado se dirija contra una persona cierta, específica, de la cual se ha podido reunir elementos que permitan dar seguridad de su participación en la comisión del delito.

Lo antes indicado guarda relación con lo manifestado por el artículo 336 del CCP, numeral 1, estableciendo que debe contarse con elementos convincentes que puedan acreditar la existencia del hecho ilegal, a la par debe haber establecido la individualización de los investigados y posibles imputados; esta condición es elemental, clave e imprescindible para estructurar y establecer una tesis inculpativa por el MP y continuar con la formalización de la fase preparatoria. (ORTIZ, 2013)

### **3.2.8 Intervención de la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción:**

La procuraduría especializada (PPEDC) en delitos de corrupción, tiene la función de defender intereses del Estado dentro del ámbito jurídico en los casos de corrupción, tanto en el ámbito local como regional y en todas las sedes existentes dentro del sistema peruano, como sede administrativa, laboral, penal, militar y constitucional, así mismo ante las cortes internacionales; de conformidad con lo establecido en el artículo 47° de la Constitución Política y lo dispuesto en el DL N° 1068 – del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento Decreto Supremo N° 017-2008-JUS.

Por tanto, la defensa de los intereses del Estado está bajo el cargo de los procuradores públicos, ejerciendo su función en orientación hacia dicho patrocinio premunido y atribuidos de autonomía funcional, conforme el principio de la defensa jurídica del Estado, denominado autonomía funcional, previsto en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nro. 1068.

Para tal fin, y en contribución a un eficaz cumplimiento de esta función, el procurador se encuentra en el deber de requerir toda la información necesaria a cualquier institución que se encuentre involucrada en el hecho perseguido, documentales, informes, antecedentes y testigos para la defensa del Estado y sus intereses. Al respecto, las instituciones a las que se les hizo el requerimiento, deben dar respuesta a estas solicitudes, bajo responsabilidad.

La procuraduría en los casos de corrupción, tiene la viabilidad de intervenir en las investigaciones preliminares, preparatorias y procesos judiciales de los delitos a fines. Estos están especificados en los ilícitos penales previstos en la sección II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Libro Segundo del Código Penal; siendo así, tenemos el siguiente catálogo de delito:

DELITOS	ARTICULOS
CONCUSIÓN	Art 382.- Concusión Art 383.- Cobro indebido Art 384.- Colusión simple y agravada Art 385.- Patrocinio ilegal Art 386.- Responsabilidad de peritos, árbitros y contadores particulares

<p>PECULADO</p>	<p>Art 387.- Peculado doloso y culposo</p> <p>Art 388.- Peculado de uso</p> <p>Art 389.- Malversación de fondos</p> <p>Art 390.- Retardo injustificado de pago</p> <p>Art 391.- Rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad</p> <p>Art 392.- Extensión de punibilidad</p>
<p>CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS</p>	<p>Art 393.- Cohecho pasivo propio</p> <p>Art 393-A.- Soborno internacional pasivo</p> <p>Art 394.- Cohecho pasivo impropio</p> <p>Art 395.- Cohecho pasivo específico</p> <p>Art 395-A.- Cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial</p> <p>Art 395-B.- Cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial</p> <p>Art 396.- Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales</p> <p>Art 397.- Cohecho activo genérico</p> <p>Art 397-A. Cohecho activo transnacional</p> <p>Art 398.- Cohecho activo específico</p> <p>Art 398-A.- Cohecho activo en el ámbito de la función policial</p> <p>Art 398-B.- Inhabilitación</p> <p>Art 399.- Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo</p> <p>Art 400.- Tráfico de influencias</p> <p>Art 401.- Enriquecimiento ilícito</p> <p>Art 401-A.- Decomiso de donativo</p> <p>Art 401-B.- Adjudicación de bienes decomisados</p> <p>Art 401-C.- Multa aplicable a la Persona Jurídica</p>

El procurador en representación del Estado, participa del proceso como Actor Civil, el procurador Anticorrupción defiende la pretensión del pago por daño generado por

el delito. El Código Procesal le otorga la facultad para poder plantear deducción de nulidad de actuados, puede ofrecer medios de prueba, así como de investigación, intervención en el juicio oral e interponer recursos impugnatorios reconocidos por Ley.

### **3.2.9 El testigo:**

Son amplias las definiciones para los “testigos” dentro de la doctrina, una de las más precisas es acotada por ALVARADO VELLOSO, (2011), expresando que el testigo es la persona que aporta el conocimiento personal que adquirió de su contacto con el hecho delictivo cometido por otras personas, captando estos datos a través de sus sentidos (p. 509). Nótese que no lo define como directamente una fuente de información objetiva o elemento de prueba igual a una documental, sino que resalta el carácter personal por la propia naturaleza de la fuente de prueba, esto es una persona natural, quien concreta la materialización del aporte de información en audiencia mediante la declaración. En la misma idea DEVIS ECHANDÍA (1969), complementa señalando que el testimonio, es el acto procesal en el cual determinada persona aporta información al juez y las partes sobre cierto hecho. (p. 315)

LINO PALACIOS precisa que los testigos son personas naturales distintas de las partes y el órgano judicial, que expone datos sobre los hechos, sus percepciones o actos de eventos pasados o de los que ha podido oír de alguno. (p. 562).

Briseño Sierra, nos señala uno de los criterios de la pertinencia de la prueba, esto es que se encuentre vinculada a los hechos imputados (1985, p. 1348), es decir, que la declaración que pretenda aportarse mediante cualquier testigo, sea ofertada por cualquiera de las partes, debe estar estrechamente direccionado a dar información aclaratoria o complementaria sobre los hechos puestos en juicio. Ello, arrastra consigo otra característica, aparte de la pertinencia se suma la idoneidad, esto es que efectivamente se dé mayores alcances al juez respecto de los hechos, en caso no se tenga vinculación con los mismos, se declarará como elemento de prueba impertinente.

Por último, se tiene la definición que plantea ORTERLLS RAMOS, (2003, p. 444), que el testigo es la persona que constituye una prueba testifical, pues da su versión

según su percepción y expectación de los hechos de circunstancias pasadas; precisando las siguientes características:

- i. Característica de oralidad y de inmediación ante el juez, al ser un medio probatorio testifical es necesaria su actuación en juicio, se diferencia del testimonio documentado.
- ii. El testigo debe ser ajeno al proceso, no puede ser juez ni parte.
- iii. El testigo debe referir solo a los hechos que implican relación directa con el caso.

Finalmente, precisamos de lo textualmente señalado por el artículo 163 del Código Procesal Penal, respecto a las obligaciones del testigo, los siguientes criterios:

- Los testigos están en el deber de acudir al ser citados por el MP y de declarar la verdad. (163. 1 del NCPP)
- Los testigos no están obligados a manifestar hechos que puedan involucrarlos penalmente o involucren a las personas que señala el numeral 1 del art. 165 del NCPP.
- Los testigos que tienen la condición de ser miembro de las fuerzas policiales o militares del Estado, no están en la obligación de señalar nombres de los informantes, pero si estos informantes no se someten a interrogatorio en calidad de testigos, estas informaciones no pueden ser tomadas en cuenta para el proceso.

En relación a que los testigos tienen el deber de rendir testimonio cuando la autoridad lo requiera, las citaciones que realiza el fiscal, suelen acompañarse con apercibimiento de conducción compulsiva, siendo que intencionalmente el testigo que se niegue a rendir su manifestación, no solo puede ser objeto de una conducción compulsiva sino hasta de una denuncia por no contribuir con la administración de justicia. En ese sentido, los deberes procesales del testigo son, i. De comparecencia, materializándose al apersonarse o hacerse presente ante una citación de la autoridad respectiva (163.1 NCPP); ii. De declarar, esta obligación se puede deducir del art. 371 del NCPP y iii. De decir la verdad, ello por cuanto la falsa declaración o testimonio se encuentra prevista como un hecho ilícito, en el art. 409 del CP.



### 3.2.10 Tutela de Derechos:

Nuestro Nuevo Código Procesal Penal, incorpora la figura de Tutela de Derechos, como una herramienta que permitirá la protección, resguardo y efectividad de los derechos fundamentales del imputado, específicamente el artículo 71 inciso 4 del CPP respecto a los derechos del imputado. Dentro de la doctrina encontramos al maestro ALVA (2010), que al respecto nos indica que la tutela de derechos, tiende al restablecimiento del *status quo* de los derechos vulnerados, esta solo se debe aplicar cuando exista una vulneración de derechos ya consumada, en específico, de los derechos que les asisten a las partes procesales; puede notarse que más que un mecanismo para amparar los derechos procesales, es un mecanismo constitucional, enfocado a la reparación del menoscabo de los derechos fundamentales. (p.15)

Recordemos que el artículo 71 del NCPP, reconoce al imputado una serie de derechos consagrados en la Constitución, estos deben ser observados en el proceso penal, orientando a los Jueces, Fiscales o Policía Nacional, a actuar de manera inmediata y comprensible, exhortando a evitar actuar preponderantemente en la primera etapa del proceso penal, e indicándoles que tienen la obligación de darle a conocer al imputado sus derechos, dejando constancia de ello en el acta.

Esta tutela no solo se extiende a cualquier vulneración todo derecho fundamental, sustantivo o procesal, reconocido a favor del imputado por la Constitución, Código Penal y Código Procesal Penal, sino también incluye a los derechos consagrados en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que el Perú ha ratificado. (SALAZAR, 2010) (p. 7 – 18)

#### **¿Cómo es el procedimiento para la aplicación de la tutela de derechos?**

En caso el imputado o acusado, consideren que durante las de Diligenciar Preliminares o en la etapa de Investigación Preparatoria, se ha vulnerado las disposiciones legales que amparan sus derechos, o siente que no se respetan sus derechos sí, puede dirigirse al Juez de Investigación Preparatoria, con el fin de que subsane la afectación, se dicten medidas correctivas o de protección que sean necesarias.

Esta solicitud, debe atenderse inmediatamente, se debe previamente constatar los hechos y debe instalarse audiencia con intervención de las partes (artículo 74 inciso 4 del NCPP); el Juez de Investigación Preparatoria está facultado para hacer valer los derechos del imputado cuando efectivamente estos estén siendo vulnerados. Ante el pedido de tutela de derecho, el juez se puede pronunciar declarándolo procedente o improcedente.

La CASACIÓN N° 943-2019/VENTANILLA, como ponente el Dr. Cesar San Martín Castro, dentro de sus fundamentos derecho, específicamente el fundamento cuarto, segundo párrafo, señala que la acción de tutela es un remedio procesal que está circunscripta a un ámbito específico, referida a la tutela o protección de los derechos constitucionales y legales que implican el artículo 71 inciso 4 del Código Procesal Penal. Siendo procedentes cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales. (p. 5)

Dentro del conocido caso del expresidente Ollanta Moisés Humala Tasso, ente la solicitud de Tutela de Derechos, peticionada por la defensa del expresidente y la ex primera dama, Nadine Heredia; la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, dentro del Expediente N° 249-2015-41, emitió Auto de Vista – Resolución Nro. Diez, precisando dentro de su cuarto fundamento que la tutela de derechos como institución se encuentra prevista en el NCPP, haciendo posible el control constitucional de las actuaciones que se realicen en la investigación por el MP , sin que sea necesario recurrir a una jurisdicción constitucional. Es alrededor de este aspecto que el NCPP se etiqueta como un sistema garantista, y por lo tanto, al juez de IP se le conoce como Juez Penal de Garantías.

### 3.3. Operatividad de las Variables

Variables	Definición de la Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
<b>Variable Dependiente</b>	Afectación del derecho de defensa del falso desconocido investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021	Afectación de derecho de defensa eficaz y al derecho de conocer los hechos imputados. Tutela de Derechos	<p>La determinación de la identidad del inculpado</p> <p>cuando existe una denuncia contra una o varias personas en específico.</p> <p>El trato y limitaciones al verdadero imputado por tener la calidad de testigo en las diligencias preliminares.</p>	El acopio y análisis de Carpetas Fiscales
<b>Variable Independiente</b>	La metodología de las diligencias preliminares de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque contra el falso desconocido	Afectación al derecho del debido proceso	Limitación de aportar medios probatorios o contradecirlos, interponer los recursos impugnatorios, etc.	

### 3.4 Hipótesis

**SÍ**, se afecta el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021, al obstaculizar al potencial imputado(s) - falso desconocido, el conocer los cargos, participar de las actuaciones y plantear una defensa eficiente al ser citado y tratado como testigo. **ENTONCES**, es necesario establecer si se puede tratar como testigo al inculcado(s) individualizado(s) en la denuncia de la noticia criminal, todo ello en beneficio como estrategia fiscal.

## IV. DISEÑO METODOLÓGICO

### 4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo presente ha adoptado para su elaboración un enfoque cualitativo de tipo básico no experimental, pues se analiza contenido doctrinal y jurídico, así como las normas legales sobre el tema de investigación; la investigación se realizó sin intervenir en el fenómeno observado que se reproduce en la realidad, tampoco se implementó métodos de análisis estadístico, ni se ha operado variables, puesto que el objetivo es describir, explicar y analizar cualidades, características y efectos de la problemática. (Quecedo y Castaño, 2002)

Para la realización, se tomó convenientemente la aplicación de una investigación tipo descriptiva, ello en relación a que lo pretendido es realizar una interpretación de la problemática que se puede producir en la práctica diaria de los procesos penales; ello mediante la contrastación con los lineamientos que nos brinda la normativa de la materia y determinar si en realidad existe conexión o no entre los factores tomados en cuenta.

#### **El tipo Descriptivo:**

(Hernández Sampier, 2011), Se refiere a diseños no experimentales, transaccionales o transversales, que son estudios realizados sin variables manipuladas prediseñadas. Lo que se hace en el análisis no experimental es mirar los fenómenos que manifiesta la naturaleza y luego estudiarlos.

Estos escenarios recopilan datos en dos puntos en el tiempo. Su propósito es describir variables y análisis, como capturar una imagen creciente de algo. Los autores señalan que esto incluye diseños descriptivos simples no experimentales que tienen como objetivo encontrar la ocurrencia de una o más condiciones o niveles variables en una población, son estudios únicamente descriptivos.

Tamayo, nos precisa que la investigación de tipo descriptiva, resultará ser el acopio y recolección de datos para su consecuente evaluación, valoración, interpretación u

análisis, caracterizada por ser una investigación no experimental, en la que no se dará operación de variables. (2006)

## 4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Los métodos son herramientas, en este caso, de investigación para poder acceder a datos que permitan su posterior análisis, teniendo en cuenta el tipo de investigación seleccionado, se tienen los siguientes:

- Se implementó un método de análisis jurídico dogmático, puesto que los datos recopilados son de origen bibliográfico, integrando la estructura del marco teórico, refiriéndose a cada uno de los elementos teóricos que nos permitan establecer un correcto análisis y discusión contrastando con los resultados.
- Se realizó un estudio sobre los parámetros normativos sobre la etapa de diligencias preliminares, en este caso “contra los que resulten responsables” como estrategia, cuando la denuncia contiene detalladamente información que permite vincular directamente a determinadas personas.
- Sobre la vulneración del derecho de defensa al no respetar la norma jurídica y jurisprudencia, así como la omisión de lo que señalan normas internacionales, ello correspondiente a un método exegético, esto es una interpretación literal de las disposiciones emitidas por fiscales.
- Una recopilación de los pronunciamientos judiciales sobre el aspecto técnico y funcional sobre el ámbito tratado, esto es las investigaciones preliminares.
- Se aplicó un método sistemático, pues se estudió la norma que enmarca el derecho de defensa, la misma que se encuentra en nuestro sistema jurídico, tomando hecho en apariencia aislados y se formuló una teoría que converge diferentes elementos, permitiendo el planteamiento de la hipótesis.

Además, el sistema metodológico implementado fue el Inductivo – Deductivo, facilitando una interpretación de los datos en base a la lógica y la razón, llegando a concluir premisas lo más cercanas a la verdad, este método axiomático es el más efectivo e ideal teniendo en cuenta el tema tratado.

### a) Método deductivo:

(Hernández Sampier, 2011), señala que él que quiere demostrar en forma interpretativa a través de la lógica que ha llegado a establecer determinadas conclusiones a partir de premisas, garantizará la veracidad de sus conclusiones, el empleo de la lógica en el modelo axiomático, lo hace ideal para una investigación.

En términos generales, se conoce que este método es un procedimiento idóneo dentro del método de investigación, por cuanto parte desde razonamientos generales y lógicos, impulsándose por leyes y principios hasta llegar a una conclusión concreta, en resumida cuenta, son conclusiones nacidas de principios.

#### **b) Método inductivo:**

(Caballero, 2006) este método, a diferencia del deductivo, parte de lo particular a lo general, el investigador observa hechos específicos y plantea una generalidad de lo observado y el comportamiento del fenómeno con la realidad, también se guía por leyes para llegar a una conclusión, pero estas conclusiones podrían ser medias verdades, pues la aplicación de la lógica parcialmente podría acrecentar los márgenes de error.

Sin embargo, la utilidad de este método puede observarse en sus características:

- Parte de hechos específicos o particulares de los cuales se extrae información.
- Identifica patrones o posibles reincidencias del fenómeno advertido.
- Plantea proposiciones en base a la evidencia y las premisas planteadas.
- Constituye un razonamiento generalizado ampliativo, que permite predicciones sobre determinados hechos similares a los analizados.
- La constante observación y los resultados envisten de mayor certeza a las conclusiones.

### **4.3 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN**

El diseño del estudio es no experimental, ya que no se manipularon las variables, se trata de una investigación de un fenómeno ya presentado, en este caso, para saber si afecta el derecho a la defensa en un proceso lanzado contra el “falso desconocido” o LQRR, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.

Es transeccional ya que se toma el análisis del fenómeno sobre un determinado periodo en el tiempo, en este caso fue desde y hasta el 2020 – 2021.

Es correlacional, puesto que de los resultados se puede evidenciar una relación de causalidad, es decir de qué manera se afecta del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el “falso desconocido” o LQRR, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.

### **4.4 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO**

Si hablamos de población, nos aproximaremos al concepto de universo sobre el que pesa este estudio, diferenciándose en cuanto a la naturaleza y forma en la que serán tomadas dentro de la investigación. Es decir, al hablar de población, es indicar el campo amplísimo del fenómeno a estudiar, del cual se extraerá una muestra que será analizada en la que se focalizará esta investigación, mediante métodos de contrastación inductivo – deductivo que ya hemos precisado anteriormente.

La población de la presente investigación abarca el análisis cuantitativo conforme a lo siguiente:

- El 100% de la muestra serán las disposiciones de inicio de diligencias preliminares recopiladas en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque durante el período 2020 – 2021.

La muestra abarca lo siguiente:



- El 15% de las disposiciones de inicio de diligencias preliminares recopiladas en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque durante el período 2020 – 2021

El muestreo se realizará mediante el acopio y análisis de 15 disposiciones de inicio de diligencias preliminares recopiladas en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque durante el período 2020 – 2021

Cabe señalar que, la primera y segunda hipótesis no tendrá un enfoque de campo, sino solo dogmático y jurisprudencial.

#### **4.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

En este trabajo se implementó la recolección de información y el respectivo análisis mediante la observación directa sobre las unidades de análisis, así mismo, el análisis documental sobre las disposiciones de investigación preliminar y los actos que se ha llevado dentro de esta subfase hasta la formalización de la investigación preparatoria.

*Respecto a los instrumentos se utilizará los siguientes:*

El instrumento conocido como fichaje de acopio de información, precisando puntos exactos y claves sobre determinadas obras, artículos, jurisprudencia entre otros, que tengan que ver con el tema tratado para su contrastación, análisis y discusión.

##### **Equipos:**

- Una computadora, a fin de indagar información de libros, trabajos de investigación, revistas o artículos electrónicos.
- Un celular para tomar fotografías de la información recopilada en libros que se encuentran en bibliotecas que están ubicadas dentro del radio del distrito judicial de Lambayeque.
- Un USB, donde almaceno toda la recopilación obtenida.

## **4.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS**

Los datos se obtuvieron mediante el acceso a determinadas carpetas fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, extrayendo los datos más pertinentes para la investigación como son las disposiciones de diligencias preliminares contra los que resulten responsables, y demás actividades previas a la formalización de la investigación. Debido a la complejidad de los casos y la política de discreción que se maneja en las investigaciones, no se ha expuesto información sensible o datos personales que puedan afectar de alguna manera a las personas implicadas, ya que no nos enfocamos en la investigación propia de los hechos sino de la actividad funcional que se ha manejado en los casos de investigación.

## **4.7 RESULTADOS:**

### **4.7.1 Presentación de los Resultados:**

Esta investigación se realizó teniendo como base una problemática muy frecuente en la práctica jurídica de nuestro sistema procesal penal, como es la Disposición de iniciar Diligencias Preliminares “contra los que resulten responsables”, pese a tener suficientes elementos para determinar al potencial inculcado del delito y atribuyéndole al mismo solo la calidad de testigo; ocasionando con ello un estado de indefensión, puesto que como solo un testigo no puede tener acceso a la información plena que pesará en su contra, a las diligencias de investigación que se debe llevar a cabo, o a la posibilidad de plantear Tutela de Derechos cuando sienta que se afectan sus derechos, tanto los consagrados en la Constitución como en la norma penal, o un control de plazos contra la demora de actuación del titular de la acción penal; se buscó determinar si la estrategia planteada por los persecutores del delito de iniciar preliminares contra los que resulten responsables, es una mala práctica estratégica no prevista por nuestro código procesal, convirtiéndose en un disfraz para burlar el control de plazos o extraer información sin que intervenga la defensa del inculcado o este último pueda ejercer la misma.

Durante el desarrollo de la investigación, se consultó material bibliográfico, audio visual y documental, así también el material extraído de las 15

disposiciones de investigación preparatoria emitidas por la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, con la finalidad de contrastar la hipótesis propuesta en un primer momento y su verificación.

Se determinó la importancia que conlleva una investigación preliminar a cargo del Ministerio Público, respetando de manera adecuada y acorde a las garantías legales y constitucionales establecidas en nuestro marco normativo y en los diversos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En esa línea, nuestra Carta Magna de 1993 (Cuarta Disposición Final Transitoria), consagra las normas relativas a los DD. HH, y Acuerdos Internacionales que ya se han desarrollado en los antecedentes internacionales.

#### **4.7.2 Resultados del análisis de la doctrina**

Si bien se ha podido integrar una gran información doctrinal en el presente trabajo, se ha seleccionado lo más relevante en relación con la problemática, objetivos e hipótesis trazada, así es que se tienen los siguientes datos.

##### **Sistema Procesal Penal y los Derechos del Imputado**

El sistema procesal peruano opera bajo los principios acusatorio, garantista, oral, de inocencia, de defensa y el debido proceso, entre otros más. En esa línea, se pudo observar que, en la práctica para iniciar diligencias preliminares o investigaciones preliminares, es suficiente una sospecha respecto de la responsabilidad penal de determinado individuo, sin que este proceso signifique una afectación al principio de garantía recogido por la constitución, pero ello se da cuando de las diligencias preliminares se pueda evidenciar una correcta aplicación de las normas y respeto de los principios, garantizando el respeto y reconocimiento de los DD.HH. inherentes a cualquier persona por igual, por ejemplo, respetar el plazo razonable de las actuaciones de investigación o las diligencias, respetar el derecho a la defensa, a conocer los hechos que se le imputan o se le pueden imputar, a plantear acciones como

observación a determinado documento o solicitar tutela de derechos cuando considere pertinente.

De acuerdo con Cáceres & Iparraguirre, nuestro proceso penal es un proceso inherente a un Estado democrático (2005), recogiendo un elemento garantista inclinado a proteger los derechos de toda persona, mediante un juicio con principios como el debido proceso. Esta idea viene en concordancia con lo señalado por Rodríguez Hurtado (2006) al mencionar que la función jurisdiccional está encaminada por principios y derechos que garantizan la administración correcta de justicia, como el derecho de defensa, el principio de contradicción, de legalidad y de tutela.

Robles (2017), indicó que nuestro sistema procesal penal, con relación al imputado, se debe garantizar el acceso al proceso penal, antes (actos de investigación) y durante (durante el proceso en sí). Aparte de reconocer los valores de justicia y equidad, brinda rango constitucional a aquellas garantías que tiene por finalidad configurar un proceso justo y acorde con los objetivos constitucionales. En relación a ello, se extrae que el inculpado tiene el derecho a no ser coaccionado a declarar, y el uso del silencio no puede configurar culpabilidad, ni se le puede realizar preguntas sugerentes o capciosas; lo que a le sería difícil controlar el respeto de todos sus derechos, si es que no tiene calidad de imputado sino solo como testigo.

Así mismo, Guardia (2016), ha precisado que el derecho de defensa es un presupuesto de validez para el desenvolvimiento del proceso penal, en el cual los sujetos titulares pueden hacer valer sus respectivas pretensiones. Al respecto Fasanando (2020) le da la razón a Guardia, al señalar como un derecho fundamental la defensa por encontrarse reconocido en la Constitución, por tanto, es primordial el reconocimiento, garantía y respeto de este derecho en el sistema jurídico. Expresiones que resultan totalmente pertinentes dentro de la comprobación de nuestra hipótesis, ya que el titular de la acción penal, al iniciar preliminares contra los que resulten responsables como método de estrategia para realizar su investigación, no hace más que limitar y vulnerar derechos del real investigado como su defensa, el debido

proceso y el principio de tutela, que, por no tener formalmente el título de imputado, no puede ejercer los derechos que le asisten al mismo.

En relación al punto, Islas (2009) de manera general nos precisa que en relación con el principio de legalidad, se constituye como una regla de competencia, y está en oposición a todos los actos contrarios a la ley establecida. Si bien Simaz (2014), al respecto precisa que el principio de legalidad previene la punición arbitraria, se puede inducir que este principio se orienta a la observancia de la norma, y en ese sentido, el titular de la acción penal no está exento a aplicar este principio. Concordando con lo dicho, nuestro código procesal penal, señala expresamente la finalidad de las Diligencias Preliminares, estando a que se deben realizar actuaciones urgentes e inaplazables, la corroboración de la existencia del ilícito y la individualización del autor, mas no señala una actuación de investigación a acreditar la responsabilidad, como algunos representantes del Ministerio Público, en su mal practicar, realizan.

Respecto a la igualdad de armas, Berbell y Rodríguez (2018) explica que consiste en reconocerle a las partes principales del proceso, la igualdad de posibilidades para defenderse o accionar dentro del proceso, manteniendo esta igualdad de posibilidades antes y durante el juicio. En virtud de ello, se vincula también el principio de contradicción, que como refiere Cubas (2008), es la posibilidad de enfrentarse a los intereses contrapuestos, y le permite al inculcado el derecho a ser oído, observar las pruebas que se recaban contra él y refutar los hechos imputados.

No obstante, todo principio debe ser garantizado, y cuando el principio garantista entra en función. En concreto es la inviolabilidad de los derechos que le asisten a las partes y, por lo tanto, también del derecho de defensa; pretende que el imputado se encuentre en condiciones óptimas para rechazar la imputación que se le dirige o, incluso, admitiéndola, pueda incorporar otras circunstancias que la neutralicen o aminoren, según la ley penal. (MAIER, 2004).

### **Las diligencias preliminares**

Las Diligencias Preliminares, son una subfase dentro de la Investigación Preparatoria, se da la actuación de la Fiscalía, al tomar conocimiento del hecho, el periodo máximo de esta subfase es de sesenta días; su finalidad es la realización de actos urgente e inaplazables, y determinación del potencial imputado. Señala Sánchez Velarde (2013) que existe la necesidad de determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente, tras la inculpación formal, la investigación preparatoria y, por ende, el proceso penal, y como bien señala Cubas (2015) ello permitirá, en su caso, que los fiscales puedan realizar óptimamente la tarea de selección de casos con el objetivo que el sistema judicial no esté saturado de causas.

El maestro San Martín (2015) destaca que se está ante diligencias preliminares, lo que desde los trámites de averiguación realizados o dispuestos por el Ministerio Público que, incluso, puede realizar la Policía que proceden o se anteponen al procesamiento formal y que permiten tratar sólidamente una ulterior investigación; debe concurrir un grado de sospecha reveladora, para lo cual es indispensable determinar e individualizar al inculpado; estos actos no son los comunes que demandan inmediatez, sino aquellas diligencias que se estiman urgentes o inaplazables. Lo urgente es aquello que se debe ejecutar rápida o prontamente, con apremio o dinamismo. Lo inaplazable es aquello que no se puede retrasar, que debe hacerse rápidamente en atención a las circunstancias del caso; por tanto, con relación a nuestra hipótesis, y lo antes señalado, no es prudente iniciar actos de investigación correspondientes a la etapa de Investigación Preparatoria Formalizada, con la finalidad de no incurrir en un perjuicio a la defensa de los presuntos autores del ilícito penal.

### **Tutela de Derecho**

Dentro de la doctrina encontramos a Alva (2010), quien en resumen señala que la tutela de derechos, es regresar al estado normal, el derecho vulnerado, ello debido a que se aplica solo cuando la vulneración se ha consumado, y lo que protege son los derechos que le asisten a las partes procesales;

recordemos que el artículo 71° del Código Procesal Penal, le reconoce al imputado una serie de derechos, estos deben ser observados en el proceso penal. Salazar (2010) nos explica que esta tutela también incluye a los derechos consagrados en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que el Perú ha ratificado. La imputación tiene un carácter progresivo al seguir determinados pasos o procesos para llegar a plantearse ante el juez competente, al respecto, la tutela de derechos llega a ser una suerte de medio limitador o de control, incluso durante y después de la etapa preliminar, por ello, la imputación imprecisa de hechos, como la no determinación o individualización de los responsables de los hechos, conlleva a una ausencia de imputación necesaria, pese a ello, en el caso que se continúe con el proceso sin respetar estos criterios, se evidencia claramente un atropello a los derechos de los investigados, que puede ser subsanada mediante la tutela de derechos.

Lo indicado, al contrastarse con nuestra hipótesis, podemos aducir que la propia Tutela de Derechos se ve vulnerado cuando en las Diligencias Preliminares se inicia investigación contra los que resulten responsables, ya que no hay sujeto procesado individualizado formalmente que pueda solicitar o recurrir a esta figura cuando se vulneren los derechos del falso desconocido.

### **Derecho de defensa del aún no identificado**

El profesor Ore Guardia (2016) nos precisa que el derecho de defensa *“constituye un presupuesto de validez para el desarrollo del proceso y aplicación de la pena, en virtud del cual los sujetos procesales, titulares de tal derecho, pueden hacer valer sus respectivas pretensiones en función de los derechos subjetivos que buscan resguardar”*. Partiendo desde dicho punto, el titular de la acción penal, debe garantizar y respetar el debido proceso y la defensa incluso en los casos que las diligencias preliminares se encuentren contra “los que resulten responsables”, en tanto que las acciones de investigación para la identificación y corroboración del hecho como un ilícito, deben contar con la garantía de los procesos, estos es que debe disponerse la participación de un abogado defensor, en las diligencias que se

vayan a desarrollar a pesar que no se haya establecido a quien se investiga sino que se opera a título de “los que resulten responsables”, con el fin de proteger y respetar los derechos de los futuros acusados o formalmente investigados.

Ello guarda relación con lo prescrito en el art. 80 del C. adjetivo Penal, que en pro de la defensa de las personas refiere que el MP hará un llamado al servicio de defensa de oficio para que provea a título gratuito la defensa necesaria que todo ciudadano necesita, con la finalidad de poder garantizar la credibilidad y legalidad de las diligencias investigativas y el respeto al debido proceso. Puede ser posible que, para intentar individualizar al inculpado, se dispongan acciones de investigación de recolección de datos o se realicen citaciones a ciertos testigos que puedan dar información relevante con tal fin; no obstante, estas diligencias deben llevarse con el énfasis en respetar el correcto procedimiento, sin afectar derechos y principios, ni atentar contra lo establecido en la norma procesal, que es claro que aún pese a no estar identificado formalmente como presunto autor o cómplice, le asisten al futuro inculpado. Por tanto, desde las diligencias preliminares (pese a que se dirija contra los que resulten responsables), etapa de formalización, intermedia y juicio, se debe priorizar el respeto de las garantías establecidas, más aún, si el MP tiene la facultad de poder hacer llamado de la asistencia de un defensor público, lo que no afecta ningún otro derecho, sino que por el contrario resulta pertinente de la finalidad de garantizar los derechos de los investigados.

#### **4.7.3 Resultados del análisis jurisprudencial**

Nuestro sistema legal, tampoco ha sido ajeno al tenor de lo investigado en la presente tesis, es así que la (Casación N° 03-2019/CIJ 116), señala que debe aperturar diligencias preliminares, cuando no se cuente con todos los presupuestos formales para inicial válidamente el proceso judicial. En ese sentido, se precisa que, si la denuncia que es objeto de conocimiento del Ministerio Público, cumple con las formalidades de individualización, acreditación de existencia del ilícito y no se requieren de actuaciones urgentes e inaplazables, es que no se debería instaurar la subfase de diligencias



preliminares sino directamente proceder con formalizar la investigación y encaminarla a recabar pruebas en relación de dar luces de la responsabilidad del ilícito.

En ese sentido, la (Casación N° 318-2011); con fecha 22 de noviembre del 2011, ante el recurso de apelación de la Quinta Fiscalía Superior Penal Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima; señala en su punto 2.8, que las diligencias preliminares tienen tres finalidades básicas, la primera es el de realizar los actos urgentes solo para determinar si los hechos denunciados son reales y ver si configuran o no en algún tipo de ilícito perseguible; como segunda finalidad, tenemos que es asegurar la escena criminal y la evidencia sensible de la comisión del ilícito; en tercer lugar y no menos importante, el de individualizar al presunto imputado fundamentalmente. Además, la situación que planteamos en la presente investigación, contraviene lo establecido en la Casación N° 318- 2011-Lima, que en su fundamento 2.9 precisa: “Cualquier otro tipo de diligencias que tuvieran una finalidad distinta a la antes mencionada constituirían fuera de los parámetros por los cuales se estableció llevar a cabo las diligencias preliminares, según lo previsto en este nuevo modelo procesal, pues de ser así, se estaría pretendiendo realizar diligencias propias de una investigación preparatoria”.

La (Casación N° 943-2019/VENTANILLA), el Dr. Cesar San Martín Castro, dentro del cuarto fundamento, segundo párrafo, señala que la acción de tutela es un remedio procesal que está circunscripta a un ámbito específico, referida a la tutela o protección de los derechos constitucionales y legales que implican el artículo 71 inciso 4 del Código Procesal Penal. Siendo procedentes cuando el imputado es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, sobre el derecho de defensa, en la Casación 281- 2011- MOQUEGUA, estableció que la defensa es elemento clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona

si no se le permite la posibilidad de presentar sus argumentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Además, que la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva. (Casación N°218- 2011)

Así mismo, tenemos a la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (2019), respecto al Expediente N° 00047-2018; la Sala en sus fundamentos tercero y cuarto de la Resolución N° 02 de fecha 15 de diciembre del 2018, precisan que es claro que nuestro sistema le reconoce a toda persona investigada o imputada, determinadas garantías procesales que le permiten ejercer su derecho de defensa desde el inicio de la investigación, y para ello es primordial que el investigado sea informado de forma oportuna sobre los cargos inculpativos, formulados en su contra, pues este derecho se encuentra reconocido en los artículo 8.2 – b de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 9 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dentro de nuestro ordenamiento en el artículo 139 incisos 14 y 15 de la Constitución Política del Perú, y claramente reconocido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Penal como en el artículo 71 inciso 1 del mismo cuerpo normativo. Resalta además en su fundamento Séptimo, que este derecho tiene tanta importancia que el proceso solo se llega a materializar si previamente el imputado tiene la información de la imputación sustentada. Pronunciamiento de la Sala que ampara la hipótesis de nuestra investigación, respecto a la importancia del derecho de defensa de la persona desde que es investigado, independientemente de si este, figura o no formalmente como tal.

### **Debido Proceso**

El Ministerio Público al optar por abrir una investigación contra los que resulten responsable, necesariamente y de forma inmediata deber ordenar a la policía que se realice los actos pertinentes para la identificación e individualización del autor o participe del delito; así también, en el caso de corrupción de funcionarios, el titular de la acción penal está facultado para requerir a las instituciones públicas afectadas, la información o documentales

para el cumplimiento de la individualización. Esta individualización es un presupuesto indispensable para iniciar investigación, de no ordenarse la acciones debidas para dar cumplimiento con esta figura, el debido proceso se vulnera y con él el principio de legalidad, puesto que como se ha podido establecer, el titular de la acción, se encuentra en la obligación de ejecutar actividades de investigación en observancia de lo establecido en la norma, respetando irrestrictamente el debido proceso, y esta obligación se sustenta mediante el respeto y garantía de la legalidad y los derechos fundamentales. Así mismo, podría decirse que se entiende la estrategia del Fiscal que tiene la intención de conseguir información en la brevedad posible y sin manipular para llegar acreditar la verdad, sin embargo, no puede omitir los criterios ya establecidos legalmente.

Estos conceptos los precisamos en base al artículo 139 inciso 3 de la Constitución, mismo que resalta ser fundamental la observancia al debido proceso, en concordancia con el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalando que por el ejercicio de defensa de sus derechos toda persona goza de una plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso.

#### **4.7.4 Interpretación y análisis de las Carpetas Fiscales analizadas**

##### **Las Carpetas Analizadas**

La muestra consiste en 10 disposiciones de apertura de Diligencias Preliminares emitidas por la Fiscalía Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque en procesos que se seguían “contra los que resulten responsables”, las cuales son las siguientes:

1. Carpeta Fiscal N.º 725-2020-2406075500
2. Carpeta Fiscal N.º 662-2020-2406075500
3. Carpeta Fiscal N.º 540-2020-2406075500
4. Carpeta Fiscal N.º 930-2020-2406075500
5. Carpeta Fiscal N.º 523-2021-2406075500
6. Carpeta Fiscal N.º 776-2021-2406075500

7. Carpeta Fiscal N.º 32-2021-2406075500
8. Carpeta Fiscal N.º 221-2021-2406075500
9. Carpeta Fiscal N.º 400-2021-2406075500
10. Carpeta Fiscal N.º 297-2021-2406075500

### **Interpretación de las carpetas analizadas**

#### ***En cuanto al objetivo principal***

El objetivo principal de la presente investigación se centra en determinar de qué manera se afecta las disposiciones preliminares contra los que resulten responsables, al derecho de defensa, debido proceso y tutela de derechos, con el fin de cumplir el objeto de la investigación; para ello deberíamos verificar la fecha de inicio de apertura de las diligencias preliminares seguidas “contra los que resulten responsables”, las actuaciones que se llevaron durante este periodo, así como el tiempo de duración hasta la formalización de la Investigación Preparatoria.

Delito investigado: DI - Inicio de investigación: IO

#### **1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500**

DI : Colusión agravada.

IO : 26 de febrero del 2020 (60días)

Formaliza : 02/09/2021

Concluye : 14/12/2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 1 año 4 meses y 5 días.*

#### **2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500**

DI : Colusión simple

IO : 05/03/2020 (60 días)

Formaliza : 19/08/2020

Concluye : 30/06/2021.

*\*Exceso de plazo hasta la formalización: 3 meses y 15 días.*

**3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500**

DI : Cohecho pasivo específico.

IO : 16/03/2020 (60 días)

Formaliza : 18/12/2020

Concluye : 20/05/2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 7 meses y 3 días.*

**4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500**

DI : Cohecho pasivo específico.

IO : 27/04/2020 (60 días)

Formaliza : 20/10/2020

Concluye : 17/12/2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 2 meses y 23 días.*

**5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500**

DI : Malversación de fondos públicos

IO : 08 de enero del 2021 (180 días)

Formaliza : 23 de septiembre del 2021

Concluye : 07 de diciembre del 2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 2 meses y 15 días.*

**6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500**

DI : Peculado

IO : 29/03/2021 (60 días)

Formaliza : 18 de agosto del 2021

Concluye : 17 de enero del 2022.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 2 meses y 20 días.*

**7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500**

DI: Cohecho pasivo.

I0: 01 de abril del 2021 (60 días)

Disposición de Formalización: 22/09/2021

Disposición de Conclusión : 07/11/2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 3 meses y 22 días.*

**8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500**

DI : Concusión

I0 : 13/04/2021 (180 días)

Formaliza : 26/08/2021

Concluye : 23/12/2021.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 1 mes y 13 días.*

**9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500**

DI : Peculado doloso

I0 : 22/04/2021 (60 días)

Formaliza : 26/07/2021

Concluye : Pendiente.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 1 mes y 13 días.*

**10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500**

DI : Negociación Incompatible

I0 : 27/07/2021

Formaliza : 13/12/2021

Concluye : pendiente.

*\* Exceso de plazo hasta la formalización: 2 meses y 17 días.*

### Análisis interpretativo

a) En cuanto a los plazos en exceso tomados en la presente investigación

CARPETA FISCAL	PLAZO EXCEDIDO PARA LA FORMALIZACIÓN
1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500	1 año 4 meses y 5 días
2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500	3 meses y 15 días
3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500	7 meses y 3 días
4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500	7 meses y 23 días
5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500	4 meses y 15 días
6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500	4 meses y 20 días
7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500	4 meses y 22 días
8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500	1 mes y 13 días.
9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500	3 mes y 13 días
10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500	2 meses y 17 días

Plazos vencidos en exceso en las carpetas fiscales analizadas en la presente investigación.

Como hemos podido apreciar en los presentes casos se ha tomado un periodo que oscila entre 1 mes llegando a pasar hasta 1 año y 4 meses para formalizar las investigaciones preparatorias, tiempo en el cual la situación jurídica de los investigados ha quedado indeterminada, más aún cuando se realizan actos de investigación sin la participación de un abogado defensor, e incluso por la condición de la investigación preliminar sin individualizar al inculpado, no puede mediar un control de plazos al respecto, afectando derechos que nuestro sistema legal les reconoce, vulnerándose además lo establecido por nuestro ordenamiento como el plazo razonable, el derecho de defensa y la tutela de derechos, correctamente establecido en el desarrollo de la presente investigación.

- b) En cuanto a las diligencias solicitadas por los despachos fiscales durante las diligencias preliminares.

CARPETA FISCAL	Diligencias ordenadas en etapa de preliminares
1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500	Se dispuso la citación de dos testigos
2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500	Se dispuso la elaboración de una pericia contable a efectos de determinar daños patrimoniales.
3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500	Se dispuso el levantamiento de secreto bancario de seis personas vinculadas a los hechos.
4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500	Se solicitó a IAPUC S.A.C la remisión de recibos electrónicos de las ventas realizadas a la entidad afectada en los años 2019-2020.
5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500	Se dispuso la citación de tres testigos con la finalidad de dar indicios para la individualización.
6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500	Se le remitió oficio a la Procuraduría Pública con la finalidad de que le remita los anexos de la denuncia presentada.
7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500	Se dispuso realizar dos pericias dactiloscópicas y grafotécnicas.
8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500	Ninguna
9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500	Se dispuso efectuar pericia contable dentro del área donde se encontraron irregularidades
10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500	Se remitió oficio a la entidad afectada para solicitar información documentaria. Se recibieron dos declaraciones de testigos.

#### Actos ordenados o desarrollados en la etapa de Diligencias Preliminares

En 09 de las 10 investigaciones que se han toma como muestra, se han ordenado actos que correspondería a la etapa formal de investigación preparatoria, usando nuevamente la justificación el no haber podido determinar o individualizar a los imputados, por lo que correspondía realizar dichas actuaciones, aun cuando en varias de esas investigaciones preliminares debía concurrir la presencia de un abogado defensor, en salvaguarda de los



derechos fundamentales de sus representados, así mismo en tres carpetas se han citado y recibido declaraciones de testigos, de los cuales algunos resultaron estar implicados y se formuló investigación preparatoria en contra suya. Al respecto, y teniendo en cuenta lo señalado, junto a los plazos excedidos, podemos notar que hay una notable libertad por parte del Fiscal disponer lo que considere “conveniente para la investigación”, pues al no haber individualizado a su imputado, y este no es reconocido como tal formalmente, no habría quien pueda de alguna manera hacer valer su derecho hasta que figure plasmado en una disposición formal en calidad de imputado.

### ***En cuanto a los objetivos específico***

En analizar y explicar el artículo 330 del Nuevo Código Procesal Penal, en primera función, determinar la finalidad de las Diligencias Preliminares, así como los actos que pueden desarrollarse dentro de la misma, y tercero, la manera en que debe proceder el Fiscal dentro de esta subfase, sin que vulnere los derechos de los presuntos desconocidos.

En primera instancia tomemos como ejemplo dos situaciones, la primera presumamos que se ha iniciado diligencias preliminares respetando los plazos y procesos normales dentro de esta etapa, y que el MP ha dispuesto la ejecución de las acciones correspondientes a esta etapa para la determinación de la existencia del delito y la identificación e individualización de los participantes del mismo, desarrollando actos con calidad de urgentes e inaplazables, sin desarrollar ninguna otra actividad de investigación adicional que vaya más allá de estos fines y requisitos. En este contexto, se está realizando de manera efectiva e idónea las diligencias preliminares contra los que resulten responsables, que lo buscado no es comprobar la responsabilidad del hecho sino, determinar si el hecho es un delito o no, y la identificación e individualización de los posibles responsables.

En un segundo supuesto, que va acorde mayormente a la realidad práctica de investigación, se inician investigaciones preliminares “contra los que resulten responsables”, los despachos fiscales, no disponen la persecución de la

determinación de la existencia del hecho, ni mucho menos cursan disposición a la Policía Nacional del Perú para determinar la identidad e implicancia de los vinculados al delito y así poder individualizarlo, sino que disponen actuaciones fundamentales con relación a la determinación de la responsabilidad penal, hasta allanamientos, cuando aún en concordancia con el artículo 330 aún no se deberían actuar diligencias necesarias para determinar la responsabilidad penal de los imputados, ya sea porque aún las diligencias preliminares no cumplen su finalidad (individualizar), y porque hay incomparecencia de la parte imputada, ni defensor legal de la misma, entre otras múltiples razones, lo que va a llevar a considerar una grave afectación al derecho de defensa de estos últimos, así también esta afectación se extiende al derecho de conocer la imputación, a participar de las actuaciones de investigación, el poder contradecir la mismas, el derecho a un debido proceso y el acceso a la tutela de derechos mientras aún no se le identifique como imputado, y finalmente todo ello engloba además una afectación legal al no cumplirse la finalidad esencial de las Diligencias Preliminares ni el respeto de los derechos que le son reconocidos a las personas que pesan sobre ellas un proceso penal.

## V. CONCLUSIONES

- Respecto al objetivo específico, **explicar la naturaleza jurídica y constitucional del derecho de defensa, así como su aplicación en el ámbito nacional e internacional.**

De la presente investigación se concluye que el sistema procesal penal de nuestro país, en base a nuestra Constitución Política, Derechos Humanos y Tratados internacionales, tiene una característica garantista, que busca proteger y asegurar los derechos que le asisten a todos los sujetos participantes en el proceso penal, así como la tutela de los mismos en caso de su vulneración, entre ellos el más resaltante es el derecho de defensa. El derecho de defensa es un presupuesto de validez para el desenvolvimiento del proceso penal, en el cual los sujetos titulares pueden hacer valer sus respectivas pretensiones. Se le consigna como un derecho fundamental por encontrarse reconocido en la Constitución, siendo imperante su garantía y respeto en el sistema jurídico. Cuando el principio garantista entra en función, en concreto se pone en marcha la inviolabilidad de los derechos que le asisten a las partes y, por lo tanto, también del derecho de defensa, buscando que el imputado se encuentre en condiciones óptimas para rechazar la imputación que se le dirige o, incluso, admitiéndola, pueda incorporar otras circunstancias que la neutralicen o aminoren, según la ley penal

- La Tutela de Derechos, es un mecanismo eficaz reconocido dentro de nuestro sistema jurídico e internacionalmente, a través del cual el inculcado, puede hacer valer sus derechos constitucionales y los expuestos en la norma adjetiva penal. Los cuales hará valer recurriendo a la vía jurisdiccional, Juez de Investigación Preparatoria, que interviene como un juez de garantías para controlar la legalidad de la investigación, por la cual cautelará que los derechos de los sujetos participantes y las garantías del debido proceso penal se respeten, concordando con lo señalado en la Sala Penal Permanente de Corte Suprema de la República en la Casación 281 – 2011 – Moquegua.
- La individualización del imputado permite garantizar el derecho fundamental de defensa que ampara al inculcado, o a cualquier sujeto sometido a un proceso penal. La norma procesal es clara al establecer los actos que pueden realizarse en las diligencias preliminares, y debe concretarse esta etapa para poder formalizar

investigación, donde justamente a partir de este punto es que se deben disponer la realización de actos destinados a corroborar la responsabilidad del o los investigados.

- Respecto del objetivo específico, **analizar desde la naturaleza jurídica de las declaraciones testimoniales en base al NCPP y el desarrollo dogmático y jurisprudencial de éste.** El testigo es la persona que aporta el conocimiento personal que adquirió de su contacto con el hecho delictivo cometido por otras personas, captando estos datos a través de sus sentidos, es una fuente de información objetiva o elemento de prueba igual a una documental, en la que resalta el carácter personal por la propia naturaleza de la fuente de prueba, esto es una persona natural, quien concreta la materialización del aporte de información en audiencia mediante la declaración, esto es que efectivamente se dé mayores alcances al juez respecto de los hechos.
- El testigo al tener esta característica de fuente personal de información, recae sobre él la obligación de testificar sobre los hechos, incluso, al ser citado puede hacerle llegar un apercibimiento de conducción compulsiva o incluso de rehusarse a comparecer, puede ser objeto de denuncia. Los deberes del testigo son, el de comparecer conforme se interpreta del art. 163 numeral 1 del NCPP, el de declarar, lo que se puede deducir del art. 371 del NCPP y de decir la verdad, ello por cuanto la falsa declaración o testimonio se encuentra prevista como un hecho ilícito, en el art. 409 del CP. El testigo cuenta con el derecho de no declarar sobre hechos que puedan responsabilizarlo penalmente (art. 163.2 NCPP), o cuando incrimine a las personas que señale el art. 165.1, así mismo, si estas personas señaladas en el artículo antes señalado se encontraran en calidad de testigos, pueden abstenerse de declarar en todo o en parte de su testimonio.
- Respecto al objetivo específico, **determinar e identificar que en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido se puede afectar el derecho de defensa, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.** De las carpetas analizadas, se extrae que el titular de la acción, apertura diligencias preliminares en casos de corrupción contra los que resulten responsables, a pesar de poder establecer una individualización o identificación concreta de los presuntos autores y formalizar así la etapa de I. Preliminar, no obstante, bajo el amparo del artículo 342 inciso 3 del CPP, dispone realizar actos de

investigación orientados a acreditar responsabilidad penal y califica de compleja la investigación aumentando el plazo, fundamentando una presunta dificultad en la identificación e individualización de los responsables. Esta estrategia procesal de investigación, es contraria al principio garantista constitucional, puesto que se escapa de las finalidades específicas de la etapa de investigación preliminar.

- Respecto al objetivo específico, **proponer una propuesta legislativa materializado en un proyecto de ley, para prevenir las posibles afectaciones que se pueden dar en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.** En sentido, tanto de la problemática como de los resultados y conclusiones expuestas, es notable la necesidad de establecer una reforma legislativa al artículo 166, que regula la modalidad de interrogación al testigo, esto en el extremo de la etapa de investigación preliminar, en tanto que la pretensión sea obtener el reguardo, tanto de la finalidad de la fase preliminar de investigación, como la garantía del respeto de los derechos y principio que se concentran en el derecho de defensa, dirigiendo la forma de llevar el interrogatorio en la línea de identificar plenamente al posible investigado y no sobre una acreditación de la responsabilidad penal de una persona que no ha sido válidamente constituida como objeto de investigación como sucede en el caso de las investigaciones contra los que resulten responsables.
- Respecto al objetivo general, **analizar de qué manera se afecta el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021;** de lo desarrollado se puede establecer que es necesario respetar el objeto de las diligencias preliminares establecidas en el CPP (principio de legalidad), y realizar solo los actos urgentes e inaplazables, por cuanto extralimitar su finalidad, el proceso se verían desnaturalizado en una investigación contra un sujeto no determinado y que puede conllevar incluso en una extensión de tiempo prolongado que sobre pasa la naturaleza y propósito de las investigaciones preliminares, la misma que naturalmente debe ser rápida a cumplir su finalidad. Solo los actos de investigación destinados a desarrollarse en la subfase preliminar, son los que se consideran actos urgentes e inaplazables, con la finalidad de individualizar al

imputado, que asegure la dirección del proceso se centre en una persona cierta y determinada.

- El titular de la acción penal, al iniciar preliminares contra los que resulten responsables como método de estrategia para realizar su investigación, no hace más que limitar y vulnerar derechos del real investigado como su defensa, el debido proceso y el principio de tutela, que, por no tener formalmente el título de imputado, no puede ejercer los derechos que le asisten al mismo.

-

## **VI. RECOMENDACIONES**

- El proceder del Ministerio Público, debe enfatizar la importancia de conducir el desarrollo de las investigaciones preliminares de una manera adecuada acorde con las garantías reconocidas por la ley y jurisprudencia nacional, como internacional. La misma que debe llevar un pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, cuya defensa es uno de los fines supremos de la sociedad y el propio Estado.
- Los actos de investigación preliminar que realice el Ministerio Público, deben ser controlados con la finalidad de que estos tengan el carácter de urgentes e inaplazables, vinculados al objeto propio de las diligencias preliminares, de tal forma que se consuma su finalidad y se formalice investigación preparatoria sin vulnerar ningún derecho de los sujetos vinculados.
- EL Ministerio Público, al iniciar preliminares contra los que resulten responsables, debe oficial a la Defensa Pública, para que se apersone a las diligencias y participe en defensa y garantía que le correspondería al autor del delito presuntamente aún no identificado; a fin de garantizar el respeto de los derechos y garantías que prevé la Constitución Política del Estado en una interpretación extensiva de lo previsto en el inciso 14) del artículo 139°.
- Se debe seguir implementando métodos o herramientas procesales que puedan permitir un mejor desarrollo en las investigaciones fiscales, tanto como en favor del persecutor del delito, la parte investigada, y el potencial posible investigado en las investigaciones dirigida contra los que resulten responsables. Dejando de lado estrategias procesales que puedan implicar una afectación tanto a los derechos que le asistente a las partes, como de la norma procesal.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALARCÓN, L. (2010). Análisis de derecho procesal peruano. Recuperado de <http://www.monografias.com/trabajos36/derecho-procesal-penal/derecho-procesal-penal2.shtml>.
- ALEGRÍA PATOW, J., CONDO MÉNDEZ, C. P., GUTIÉRREZ ESPINOZA, S., HERRERA LÓPEZ, D., MENZALA HUAHUASONCO, J., & PONCE MULLISACA, P. y. (2012). La Terminación Anticipada en el Perú. Recuperado el 12 de junio de 2020, de La Terminación Anticipada en el Perú: <https://www.usmp.edu.pe/derecho/instituto/revista/investigaciones-doctorales/la-terminacion-anticipada-en-el-peru.pdf>.
- ALVARADO VELLOSO, A. (2011). *Lecciones de Derecho Procesal Civil*, Editorial San Marcos, 2ª edición, Lima, p. 509.
- ANDREW STUMER. (2018). La presunción de Inocencia una Perspectiva desde el Derecho probatorio y los derechos humanos Traducción de Walter Reifarth Muñoz, Marcial Pons.
- ASENCIO MELLADO, J. M. (2004). Derecho procesal penal. Valencia: Tirant lo blanch.
- BARONA VILAR, S. (1994). La conformidad en el proceso penal español. Valencia: Tirant lo blanch.
- BERBELL, C. & RODRÍGUEZ, Y. (2018). ¿Qué es la igualdad de armas y el derecho al proceso debido? Confilegal. Obtenido de <https://confilegal.com/20180804-la-igualdad-armas-conocida-derecho-anglosajon-due-process-of-law/>.
- BRISEÑO SIERRA, H. (1995). Derecho Procesal, Volumen II, 2ª edición, Editorial Harla, Mexico.
- BUTRON BALIÑA, P. M. (1997). La conformidad del acusado en el proceso penal. Madrid: Me Graw Hill.
- CABALLERO, A. (2006). Guías metodológicas para los planes y tesis de maestría y doctorado. (I. M. Caro, Editor) Recuperado el 22 de junio de 2020, de



[http://investigación\\_y\\_académica.blogpost.com/2011/04/el-método-cientifico-iii-html](http://investigación_y_académica.blogpost.com/2011/04/el-método-cientifico-iii-html).

CÁCERES, R. & IPARRAGUIRRE, R. y otro. (2005). Código Procesal Penal comentado- Juristas Editores, Lima-Perú.

CALDERÓN, A. (2007). El abc del Derecho Procesal Penal. (1 ed.) Lima: Egacal.

CALDERÓN, A., & ÁGUILA, G. (2008). Enciclopedia Jurídica. (1 ed). Lima: Egacal.

CASTILLO, L. (2005). Los Principios Procesales en el Código Procesal Constitucional. Recuperado el 10 de mayo de 2020, de [https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2066/Principios\\_proces](https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2066/Principios_proces).

CASTILLO, O. (2011). Economía Agraria: apuntes de clase. (F. d. Agrícolas, Ed.) Monteria, Monteria, Colombia: Universidad de Córdoba.

COLLANTES MEJÍA, M. A. (2017). Los factores de influencia significativa en la poca aplicación de la conclusión anticipada, en el distrito judicial de Huaura, año 2016. Recuperado el 18 de junio de 2020, de Los factores de influencia significativa en la poca aplicación de la conclusión anticipada, en el distrito judicial de Huaura, año 2016: [http://200.37.16.212/bitstream/handle/usmp/3541/collantes\\_mma.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://200.37.16.212/bitstream/handle/usmp/3541/collantes_mma.pdf?sequence=3&isAllowed=y).

CORBETTA, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.

CRISTÓBAL TÁMARA, T. (2020). El principio de legalidad como exigencia mínima de legitimación del poder penal del Estado. Obtenido de <https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/ropj/article/download/267/412/#:~:text=El%20principio%20d>.

CUBAS VILLANUEVA, V. (2009). El nuevo proceso penal peruano. Lima: Palestra.

CUBAS, V. (2008). Principios del proceso penal en el nuevo Código Procesal Penal. Derecho & Sociedad, 25. Recuperado de

<http://blog.pucp.edu.pe/blog/derysoc/2008/06/03/principios-del-proceso-penal-en-el-nuevo-codigo-procesal-penal/>.

CUBAS, VILLANUEVA, V. (2015). *El nuevo proceso penal*. Ed. Palestra, 2.a ed. Lima.

DE LA OLIVA SANTOS, A. y. (2002). *Derecho procesal penal*. Madrid: Cuera.

DEL RÍO LABARTHE, G. (2010). *La etapa intermedia en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio*. Lima: ARA.

DEVIS ECHANDÍA, Hernando. (1969). *Compendio de pruebas judiciales*, Bogotá, p. 315.

DIAZ GUEVARA, R. I. (2019). Análisis constitucional y procesal de la improcedencia de la terminación anticipada y conclusión anticipada en el delito de violación sexual. Recuperado el 6 de junio de 2020, de Análisis constitucional y procesal de la improcedencia de la terminación anticipada y conclusión anticipada en el delito de violación sexual: igualdad ante la ley en la conclusión anticipada.

EGUIGUREN, f. (s.f.). Principio de igualdad y derecho a la no discriminación. Recuperado el 02 de mayo de 2020, de Principio de igualdad y derecho a la no discriminación: <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/1573>.

FALLA, M. (2013). La Imputación y la Investigación Fiscal. *Ius*, 6, 56-68. Obtenido de: [http://repositorio.usat.edu.pe/bitstream/usat/1270/1/Ius\\_2013-II\\_Doctrina\\_MiguelFallaRosado.pdf](http://repositorio.usat.edu.pe/bitstream/usat/1270/1/Ius_2013-II_Doctrina_MiguelFallaRosado.pdf).

FASANANDO, J. M. (2020). Reflexiones Sobre el Derecho de Defensa Procesal en el Sistema Jurídico Peruano. Obtenido de <https://icj.pe/reflexiones-sobre-el-derecho-de-defensa-procesal-en-el-sistema-juridico-peruano/>.

GALLOSO ASECIO, A. M. (2017). Análisis de la conclusión anticipada del proceso a propósito de la confesión sincera o juicio de conformidad. Recuperado el 25 de junio de 2020, de Análisis de la conclusión anticipada del proceso a propósito de la confesión sincera o juicio de conformidad: <http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/3503>.

- GARCIA RADA, Domingo. Manual de Derecho Procesal Penal, Octava Edición, Eddili, Lima, 1984.
- GIMENO SENDRA, V. (2004). Derecho Procesal Penal. Madrid: Colex.
- GOMEZ COLOMBER, J. L. (2004). Derecho Jurisdiccional, tomo III, El proceso penal . Valencia: Tirant lo blanch.
- GONZÁLES ZÚÑIGA, M. (2019). La garantía procesal del Derecho a la Defensa durante la investigación preparatoria: Un análisis a la actuación de los abogados y magistrados del Distrito Judicial de Lima. (Tesis). Obtenido de: <http://repositorio.unfv.edu.pe/handle/20.500.13084/3734>.
- HERNÁNDEZ R, FERNÁNDEZ, C., & BAPTISTA, M. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). México., México D.F., México: McGraw-Hill.
- HERNÁNDEZ SAMPIER, R. F. (2011). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.
- HUERTA GUERRERO, L. A. (2009). El derecho de igualdad. Recuperado el 28 de junio de 2020, de El derecho de igualdad: [file:///C:/Users/Jairo/Downloads/7686-Texto%20del%20art%C3%ADculo-30153-1-10-20140120%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Jairo/Downloads/7686-Texto%20del%20art%C3%ADculo-30153-1-10-20140120%20(2).pdf).
- INFORMÁTICA, I. N. (2019). Perú, Acuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2012-2018- Visión Departamental, Provincial y Distrital. Recuperado el 08 de junio de 2020, de Perú, Acuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2012-2018- Visión Departamental, Provincial y Distrital: [https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1691/libro.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1691/libro.pdf).
- INFORME ESPECIAL DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDA EDICIÓN - AGOSTO 2019.
- ISLAS, R. (2009). Sobre el principio de legalidad. Revista en el Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 99-108. Obtenido de: <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/3864-3423-1-PB.pdf>.

- LINO PALACIO, Enrique. *Derecho Procesal Civil*, Tomo IV, Abeledot Perrot, Buenos Aires, p. 562.
- MAIER, Julio. (2004). *Derecho procesal penal*, t. II, Editores del Puerto, Buenos Aires.
- Mg. ROBLES SOTOMAYOR, Fernando Martín *Derecho Procesal Penal I: manual autoformativo interactivo* / Fernando Martín Robles Sotomayor. -- Huancayo: Universidad Continental, 2017.
- MONTERO, E. (2014). Los Hechos en los límites mínimos del Principio de Imputación Necesaria. *Gaceta Penal & Procesal Penal*, 57, 1-22. Obtenido de: [http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/imputacion\\_necesaria\\_-\\_2014.pdf](http://www.incipp.org.pe/archivos/publicaciones/imputacion_necesaria_-_2014.pdf).
- MONTÓN REDONDO, A. (1999), *Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- MORENO CATENA, V. (2000). *El proceso penal*. Valencia: Tirant lo blanch.
- MORENO CATENA, V. (2005). *Derecho Procesal Penal*. Valencia: Tirant lo blanch.
- MORENO, V. (2010). Sobre el derecho de defensa: Teoría & Derecho. *Revista de Pensamiento Jurídico*, el derecho de defensa, 8, 17.
- NAVARRO, S. (2006). Las TICs y el enfoque de Sen: identificando nuevas capacidades en el medio rural. Universidad de Piura. Piura: Consorcio de Investigación Económica y Social.
- ORE GUARDÍA, Arsenio. (1993). *Estudios de Derecho Procesal Penal, Alternativas*, Lima.
- ORE GUARDIA. (2016). *Derecho procesal penal peruano. Análisis y comentarios al Código Procesal Penal*. Tomo I.
- PARRA QUIJANO, Jairo. *Manual de Derecho Probatorio*, Ediciones Librería del Profesional, 7.ª edición, Colombia, 1997.

- QUECEDO, R, & CASTAÑO, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. Revista de Psicodidáctica, (14). Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>
- TOCTO OCUPA, P.J. (2018). EL TESTIGO DIRECTO Y SUS IMPLICANCIAS JURIDICAS ANTE SU INASISTENCIA EN LA ETAPA DE JUZGAMIENTO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA DEL PERIODO 2016-2017, Universidad Nacional de Piura.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis Nuevo Código Procesal Penal. Tomo II. Rodhas, Lima, 2009, p. 258.
- POMA COCHACHI, J. (2020). La investigación preliminar en el proceso penal peruano, problemas y situaciones de afectación a los Derechos Fundamentales. Tesis – Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Obtenido de: <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2299>.
- RATTI MENDAÑA, F. (2015). Los principios jurídicos: revisión histórica y concepción actual desde la perspectiva neoconstitucionalista [en línea], Prudentia Iuris, 79. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/principios-juridicos-revision-historica.pdf>.
- ROBLES SOTOMAYOR, Fernando Martín Derecho Procesal Penal I: manual autoformativo interactivo / Fernando Martín Robles Sotomayor. -- Huancayo: Universidad Continental, 2017.
- RODRIGUEZ GARCIA, N. (1997). La justicia penal negocial. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- RODRÍGUEZ HURTADO, Mario, La constitucionalización del proceso penal: principios y modelo del Código Procesal Penal. En: Academia de la Magistratura. Programa de Capacitación para el Ascenso. Curso de Formación Especializada en el Nuevo Modelo Procesal Penal. Módulo 1., Lima, 2006, p. 150.
- RUBIO CORREA, M. (2009). El sistema jurídico - Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUCP.

SALAS, V. (2016). El rol de la asociatividad en la participación comercial de los productores agrarios: el caso de Piura. Universidad de San Martín de Porres, Consorcio de Investigación Económica y Social. Lima: CIES.

SALAZAR, R. (2010). La tutela de derechos y sus modalidades en el nuevo sistema procesal penal peruano. pp. 7 - 18. Disponible en <https://goo.gl/RYxmNK>

SAN MARTIN CASTRO, C. E. (2012). Estudios de Derecho Procesal Penal. Lima: Grijley E.I.R.L.

SAN MARTÍN CASTRO, César. (2020). *Derecho Procesal Penal. Lecciones*. Editores. Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales y el Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Segunda Edición, setiembre.

SAN MARTÍN, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas Políticas Sociales, p. 39.

SANCHEZ VELARDE, Pablo. (2013). *Código Procesal Penal comentado*. Ed. IDEMSA, Lima.

SÁNCHEZ, P. (2004). Manual de derecho procesal penal. Lima: Idemsa.

VÉLEZ, G. (2007). El nuevo Código Procesal Penal: La necesidad del cambio en el sistema procesal peruano. Recuperado de [www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/marzo/01/5\\_velez.doc](http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2007/marzo/01/5_velez.doc)

VIVAS USSHER. Gustavo. (1999). *Derecho procesal penal*. Alveroni Ediciones, Córdova.

#### - **Jurisprudencia**

ACUERDO PLENARIO 07-2006/CJ-116. Recuperado del sitio de internet: [https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2d16b9804075bac9b71ff799ab657107/acuerdo\\_plenario\\_072006\\_CJ\\_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2d16b9804075bac9b71ff799ab657107](https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2d16b9804075bac9b71ff799ab657107/acuerdo_plenario_072006_CJ_116.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2d16b9804075bac9b71ff799ab657107).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA – SALA PENAL PERMANENTE. Casación N° 328-2012-Ica. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4a327f00449d4494b1edfb01a4a5d4c4/CAS+328-2012+Ica.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4a327f00449d4494b1edfb01a4a5d4c4>.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA – SALA PENAL PERMANENTE - LIMA. Casación N° 943-2019/VENTANILLA. Obtenido de <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4701780042e63ab48a85ba5aa55ef1d3/casacion+943-2019.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4701780042e63ab48a85ba5aa55ef1d3>

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. I Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente y Transitorias. Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 (2017), obtenido de <https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/10/Legis.pe-Sentencia-Plenaria-Casatoria-1-2017-CIJ-433.pdf>.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. XI Pleno Jurisdiccional Casatorio de las Salas Penales Permanente, Transitorias Especiales - 2019. Acuerdo-Plenario-3-2019-CIJ-116. Obtenido de [https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/10/Acuerdo-Plenario-3-2019-CIJ-116-Legis.pe\\_.pdf](https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/10/Acuerdo-Plenario-3-2019-CIJ-116-Legis.pe_.pdf).

SALA PENAL PERMANENTE DE LIMA, Sentencia Casatoria N° 318-2011, obtenido de [https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Casaci%C3%B3n-318-2011-Lima-Legis.pe\\_.pdf?fbclid=IwAR3iydmFy\\_63gXbOZEf9xtNLbUhH3pQlCy6-9T2QFXzOFgzyGJXHAerX\\_ok](https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/10/Casaci%C3%B3n-318-2011-Lima-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR3iydmFy_63gXbOZEf9xtNLbUhH3pQlCy6-9T2QFXzOFgzyGJXHAerX_ok).

SALA PENAL PERMANENTE. Casación N° 66-2010, Puno, obtenido de <https://lpderecho.pe/casacion-66-2010-puno-desde-cuando-se-computa-plazo-las-diligencias-preliminares/>.

## ANEXOS

### ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO PLANTEADO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
<p><b>Problema general:</b></p> <p>¿Se afecta el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021??</p>	<p><b>Objetivo general</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analizar de qué manera se afecta del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.</li> </ul> <p><b>Objetivos específicos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Explicar la naturaleza jurídica y constitucional del derecho de defensa, así como su aplicación en el ámbito nacional e internacional.</li> <li>- Analizar desde la naturaleza jurídica de las declaraciones testimoniales en el Código Procesal Penal Peruano y el desarrollo dogmático y jurisprudencial de éste.</li> <li>- Identificar de qué manera se afecta del derecho de defensa al ser citado como testigo bajo la formulación de preguntas orientadas en calidad de imputado en la Fiscalía <b>Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.</b></li> </ul>	<p><b>Hipótesis</b></p> <p><b>SI</b>, se afecta el derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020 – 2021.</p> <p><b>ENTONCES</b>, es necesario establecer si se puede citar como testigo bajo la orientación de preguntar formuladas en calidad de imputado, todo ello en beneficio como estrategia fiscal.</p>	<p>Técnica: Observación y Análisis Documental</p> <hr/> <p>Instrumentos:</p> <p>Fichaje de recojo de información</p>



## ANEXO 02: DE LAS CARPETAS FISCALES ANALIZADAS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Carpetas Fiscales	Delito	Inicio de Diligencias Preliminares	Formalización de la investigación Preparatoria	Disposición de Conclusión	Exceso de plazo hasta la F.I.P
1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500	Colusión agravada	26 de febrero del 2020 (60 días)	02 de setiembre del 2021	14 de diciembre del 2021	1 año 4 meses y 5 días
2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500	Colusión simple	05 de marzo del 2020 (60 días)	19 de agosto del 2020	30 de junio del 2021	3 meses y 15 días.
3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500	Cohecho pasivo específico	16 de marzo del 2020 (60 días)	18 de diciembre del 2020	20 de mayo del 2021	7 meses y 3 días
4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500	Cohecho pasivo específico	27 de abril del 2020 (60 días)	20 de octubre del 2020	17 de febrero del 2021	2 meses y 23 días
5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500	Malversación de fondos públicos	08 de enero del 2021 (180 días)	23 de septiembre del 2021	07 de diciembre del 2021	2 meses y 15 días
6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500	Peculado	29 de marzo del 2021 (60 días)	18 de agosto del 2021	17 de enero del 2022	2 meses y 20 días
7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500	Cohecho pasivo	01 de abril del 2021 (60 días)	22 de septiembre del 2021	07 de noviembre del 2021.	3 meses y 22 días
8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500	Concusión	13 de abril del 2021 (180 días)	26 de agosto del 2021	23 de diciembre del 2021	1 mes y 13 días
9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500	Peculado doloso	22 de abril del 2021 (60 días)	26 de julio del 2021	Pendiente	1 mes y 13 días
10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500	Negociación Incompatible	27 de julio del 2021	13 de diciembre del 2021	Pendiente	2 meses y 17 días

CARPETA FISCAL	PLAZO EXCEDIDO PARA LA FORMALIZACIÓN
1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500	1 año 4 meses y 5 días
2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500	3 meses y 15 días
3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500	7 meses y 3 días
4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500	7 meses y 23 días
5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500	4 meses y 15 días
6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500	4 meses y 20 días
7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500	4 meses y 22 días
8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500	1 mes y 13 días.
9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500	3 mes y 13 días
10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500	2 meses y 17 días

Plazos vencidos en exceso en las carpetas fiscales analizadas en la presente investigación.

CARPETA FISCAL	Diligencias ordenadas en etapa de preliminares
1. Carpeta Fiscal n.º 725-2020-2406075500	Se dispuso la citación de dos testigos
2. Carpeta Fiscal n.º 662-2020-2406075500	Se dispuso la elaboración de una pericia contable a efectos de determinar daños patrimoniales.
3. Carpeta Fiscal n.º 540-2020-2406075500	Se dispuso el levantamiento de secreto bancario de seis personas vinculadas a los hechos.
4. Carpeta Fiscal n.º 930-2020-2406075500	Se solicitó a IAPUC S.A.C la remisión de recibos electrónicos de las ventas realizadas a la entidad afectada en los años 2019-2020.
5. Carpeta Fiscal n.º 523-2021-2406075500	Se dispuso al citación de tres testigos con la finalidad de dar indicios para la individualización.
6. Carpeta Fiscal n.º 776-2021-2406075500	Se le remitió oficio a la Procuraduría Pública con la finalidad de que le remita los anexos de la denuncia presentada.
7. Carpeta Fiscal n.º 32-2021-2406075500	Se dispuso realizar dos pericias dactiloscópicas y grafotécnicas.
8. Carpeta Fiscal n.º 221-2021-2406075500	Ninguna
9. Carpeta Fiscal n.º 400-2021-2406075500	Se dispuso efectuar pericia contable dentro del área donde se encontraron irregularidades
10. Carpeta Fiscal n.º 297-2021-2406075500	Se remitió oficio a la entidad afectada para solicitar información documentaria. Se recibieron dos declaraciones de testigos.

Actos ordenados o desarrollados en la etapa de Diligencias Preliminares

## **ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

**Ficha de Observación de Disposiciones Fiscales en la Fiscalía Especializada en Delitos de  
Corrupción de Funcionarios de Lambayeque durante el período 2020 – 2021.**

### **A. Datos generales**

**Distrito fiscal** :

**Sede Judicial** :

**Observador** :

### **B. Datos específicos**

<b>N° de caso</b>	
<b>Dependencia fiscal</b>	
<b>Fiscal</b>	
<b>Materia</b>	
<b>Agraviado</b>	
<b>Investigado</b>	

### **C. Dimensiones de Observación**

<b>Afectación al derecho de defensa frente a la inaplicación de la imputación necesaria en la disposición de diligencias preliminares en el distrito fiscal de Lambayeque 2020 - 2021</b>	
<b>Disposiciones de inicio de diligencias preliminares</b>	

## I. DATOS GENERALES

**Apellidos y nombre del experto : Dr.**

Institución donde labora :

Especialidad :

Instrumento de evaluación : Ficha de Evaluación para medir la variable materia de investigación

Autor (s) del instrumento (s) : **Zully Criss Chimpén Cadenillas.**

## ASPECTOS DE VALIDACIÓN

**MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2) ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5)**

CRITERIOS	INDICADORES	1	2	3	4	5
CLARIDAD	Con lenguaje apropiado y libre de ambigüedades acorde con los sujetos a nivel nacional.					
OBJETIVIDAD	Las instrucciones del instrumento permiten recoger la información objetiva sobre la variable materia de investigación					
ACTUALIDAD	El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable materia de investigación					
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición operacional y conceptual respecto a la variable, que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.					
SUFICIENCIA	El instrumento es suficiente en cantidad y calidad acorde con la variable, dimensiones e indicadores.					

INTENCIONALIDAD	El instrumento es coherente con el tipo de investigación y responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio.					
CONSISTENCIA	La información que se recoja a través del instrumento, permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la investigación.					
COHERENCIA	El instrumento expresan relación con los indicadores de cada dimensión de la variable materia de investigación					
METODOLOGÍA	La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación.					
PERTINENCIA	La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del instrumento.					
<b>PUNTAJE TOTAL</b>						

(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable)

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

PROMEDIO DE VALORACIÓN:

Chiclayo, de ..... de.....

## **ANEXO 04: DESARROLLO DE PROPUESTA LEGISLATIVA**

### **1.1. INTRODUCCIÓN**

Las Diligencias Preliminares son una subfase dentro de la Etapa de Investigación Preparatoria, la cual se inicia desde los primeros actos de investigación, luego de recepcionada la denuncia. La policía está a disposición de lo que señale el Fiscal, quien exhorta qué actuaciones de urgencia o imprescindibles son las que se deberán actuar; esta etapa la inicia el Ministerio Público junto a la Policía Nacional de necesitarlo, sin embargo, ello no siempre fue así.

El sistema jurídico de nuestro país ha venido en evolución a lo largo del tiempo, el cambio se debe a las variaciones de las tendencias ideológicas y políticas que predominan cada etapa social en el Perú.

El antecesor de nuestro Código Procesal Penal del 2004, se creó en 1940 publicándose con la denominación Código de Procedimientos Penales, durante su vigencia, el sistema judicial penal adoptó en ese entonces, una característica burocrática, rígida y secreta, se le criticó y consideró como lento e injusto, interfiriendo así con garantizar la libertad de las personas, la economía procesal, el derecho común, el bienestar de la sociedad y la democracia de la nación.

Nuestro Código Procesal Penal del 2004, se focaliza en regular que los procesos se cumplan con una calidad de transparencia real, oportuna y garantista de los derechos fundamentales de las partes, por tanto, el proceso debe desarrollarse bajo los principios de contradicción e igualdad o al menos es lo que se pretende buscar con esta norma objetiva. El modelo procesal penal actual, debe encaminar o parametrar el proceso dentro de la rapidez, eficacia y justicia que promulga en sus lineamientos. Las

actuaciones deben desarrollarse dentro de los procedimientos y garantías que correspondan, respetando los derechos fundamentales asistentes a las partes.

## **1.2. OBJETIVO**

Establecer un límite legal aplicable en relación a las preguntas orientadas de una persona que es citada como testigo, pero que, sin embargo, las preguntas que se le formulan son orientadas a una responsabilidad penal, ello a fin que el magistrado (fiscal) logre obtener información de las respuestas como testigo y posteriormente una vez que esté formalizada la investigación los individualice como imputado.

## **1.3. ALCANCE**

La presente propuesta legislativa plantea tener un alcance nacional, por cuanto lo que se pretende es incorporación de un extremo del artículo del Código Procesal Penal, por lo que su repercusión será efectiva para todos los procesos penales a lo largo del territorio nacional, no teniendo carácter retroactiva, pero si debiendo aplicarse desde su promulgación e incorporación al aparato normativo antes señalado.

## **1.4. BASE LEGAL**

### **Constitución Política del Perú de 1993.**

Artículo 139. - La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

3. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala.

#### **Nuevo Código Procesal Penal 2004.**

##### **Artículo 167.- Plazo**

1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba.
2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado.
3. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.

#### **1.5. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El fiscal, representante del Ministerio Público, es quien opera bajo la titularidad del ejercicio de la acción penal conferida por nuestra Constitución en el artículo 159°, pudiendo iniciar sus acciones de oficio, a petición de la víctima o por testigo del hecho, así como por tomar conocimiento de la noticia policial o denuncia. Este conduce desde un inicio el proceso de investigación del hecho ilícito, siguiendo un criterio de carácter objetivo, desarrollando la investigación bajo los parámetros de la Constitución Política y la Ley, o eso es lo que se entiende de lo preestablecido en la norma.



No obstante, en la práctica, hay una abertura al momento del inicio de las Diligencias Preliminares y la formalización de la Investigación Preparatoria, pequeña pero aprovechable para ciertos persecutores de la acción penal, que aprovechan la misma para realizar prácticas contra vinientes al respeto del derecho de defensa del inculpado.

El impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El Estado debe tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.

#### **1.6. PROPUESTA LEGISLATIVA**

1. Agregar el numeral 4 al artículo 342 del Nuevo Código Procesal Penal, el cual señala:

##### **Artículo 166.- Contenido de la declaración**

1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba.
2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado.

3. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.

Debiendo señalar:

Artículo 166.- Plazo

1. 1. La declaración del testigo versa sobre lo percibido en relación con los hechos objeto de prueba.
2. Si el conocimiento del testigo es indirecto o se trata de un testigo de referencia, debe señalar el momento, lugar, las personas y medios por los cuales lo obtuvo. Se insistirá, aun de oficio, en lograr la declaración de las personas indicadas por el testigo de referencia como fuente de conocimiento. Si dicho testigo se niega a proporcionar la identidad de esa persona, su testimonio no podrá ser utilizado.
3. No se admite al testigo expresar los conceptos u opiniones que personalmente tenga sobre los hechos y responsabilidades, salvo cuando se trata de un testigo técnico.
4. **Las preguntas formuladas por la autoridad competente, principalmente por el Ministerio Público, como ente persecutor del delito, deben ser orientadas a obtener información de la persona que es citada como testigo y así llegar a la búsqueda de la verdad. No se permitirá preguntas a sabiendas que son orientadas a lograr la responsabilidad penal de la persona que es citada como testigo.**

# ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

152

Siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio del año Dos Mil  
Ventitres, en la Sala de Sustentación de la Escuela de Posgrado de la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del Jurado,  
designados mediante Resolución N° 634-2013-EPG de fecha 07 Julio 2013, conformado por:

Dr. EZEQUIEL BAUDELIO CHAVANDY CONREA PRESIDENTE (A)

Dr. VICTOR ROBERTO ANACLETO GUERRERO SECRETARIO (A)

Mg. LEOPOLDO YZQUIENDO HERNANDEZ VOCAL

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO ASESOR (A)

Con la finalidad de evaluar la tesis titulada

LA VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA EN LAS INVESTIGACIONES  
INICIADAS CONTRA EL FALSO DECONOCIDO, EN LA FISCALIA  
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE  
LAMBAYEQUE PERIODO 2020-2021

presentado por el (la) Tesista ZULY CRIST CHIMDEN CADENILLAS

sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 634-2013-EPG de fecha 7 Julio  
del 2013

El Presidente del jurado autorizó del acto académico y después de la sustentación, los señores  
miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que  
fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 17 puntos que equivale al  
calificativo de BUENO

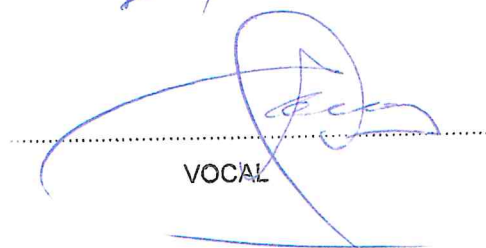
En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de:

MAESTRIA EN DERECHO CON MENCIÓN EN  
CIENCIAS PENALES

Siendo las 11:30 AM horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la  
resente acta.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

  
VOCAL

  
ASESOR

## **CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS**

Yo, Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO, Asesora del tesista ZULLY CRISS CHIMPÉN CADENILLAS, luego de la revisión exhaustiva de su Tesis titulada **LA VULNERACION DEL DERECHO DE DEFENSA EN LAS INVESTIGACIONES INICIADAS CONTRA EL FALSO DESCONOCIDO, EN LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LAMBAYEQUE-PERIODO 2020-2021**", constado que la misma tiene un índice de similitud de **13%** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

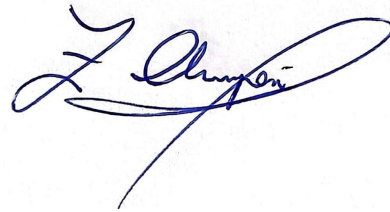
**Lambayeque, 2 de Marzo del 2023.**



**Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO**

**D.N.I 40997649**

**ASESORA**



**ZULLY CRISS CHIMPEN CADENILLAS**

**D.N.I. Nº 45907540**

**TESISTA**

# “La vulneración del derecho de defensa en las investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque – Período 2020

## INFORME DE ORIGINALIDAD

13%

INDICE DE SIMILITUD

13%

FUENTES DE INTERNET

2%

PUBLICACIONES

5%

TRABAJOS DEL  
ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

1	<a href="http://repositorio.unprg.edu.pe">repositorio.unprg.edu.pe</a>	1 %
Fuente de Internet		

2	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a>	1 %
Fuente de Internet		

3	<a href="http://derecho.usmp.edu.pe">derecho.usmp.edu.pe</a>	1 %
Fuente de Internet		

4	<a href="http://doku.pub">doku.pub</a>	1 %
Fuente de Internet		

5	Submitted to Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo	1 %
Trabajo del estudiante		

6	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a>	1 %
Fuente de Internet		

7	<a href="http://hdl.handle.net">hdl.handle.net</a>	1 %
Fuente de Internet		

[repositorio.continental.edu.pe](http://repositorio.continental.edu.pe)



Mary Isabel Colina Moreno  
DNI N° 40997649

8

Fuente de Internet

1 %

9

[repositorio.ucv.edu.pe](https://repositorio.ucv.edu.pe)

Fuente de Internet

1 %

10

Submitted to Pontificia Universidad Catolica del Peru

Trabajo del estudiante

&lt;1 %

11

[dokumen.pub](https://dokumen.pub)

Fuente de Internet

&lt;1 %

12

[repositorio.upt.edu.pe](https://repositorio.upt.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

13

[repositorio.uladech.edu.pe](https://repositorio.uladech.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

14

[repositorio.undac.edu.pe](https://repositorio.undac.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

15

Submitted to Universidad Cesar Vallejo

Trabajo del estudiante

&lt;1 %

16

[repositorio.unsaac.edu.pe](https://repositorio.unsaac.edu.pe)

Fuente de Internet

&lt;1 %

17

[ww1.docero.mx](https://ww1.docero.mx)

Fuente de Internet

&lt;1 %

18

[repositorio.usmp.edu.pe](https://repositorio.usmp.edu.pe)


Fuente de Internet

&lt;1 %

19

Submitted to Universidad Continental

Trabajo del estudiante



Mary Isabel Colina Moreno  
DNI N° 40997649

<1 %

20

[edictos.organojudicial.gob.bo](http://edictos.organojudicial.gob.bo)

Fuente de Internet

<1 %

21

[lpderecho.pe](http://lpderecho.pe)

Fuente de Internet

<1 %

22

[comprasestatales.org](http://comprasestatales.org)

Fuente de Internet

<1 %

23

[repositorio.upao.edu.pe](http://repositorio.upao.edu.pe)

Fuente de Internet

<1 %

24

[content.lpderecho.pe](http://content.lpderecho.pe)

Fuente de Internet

<1 %

25

[repositorio.uap.edu.pe](http://repositorio.uap.edu.pe)

Fuente de Internet

<1 %

26

Submitted to Universidad de San Martín de Porres

Trabajo del estudiante

<1 %

27

[idl-bnc-idrc.dspacedirect.org](http://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org)

Fuente de Internet

<1 %

28

[vsip.info](http://vsip.info)

Fuente de Internet

<1 %

29

[estudioderechoylibertad.com](http://estudioderechoylibertad.com)

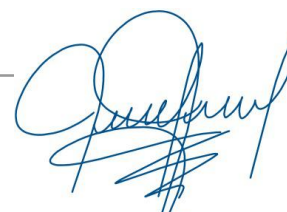
Fuente de Internet

<1 %

30

[1library.co](http://1library.co)

Fuente de Internet



Mary Isabel Colina Moreno  
DNI N° 40997649

<1 %

31

tesis.pucp.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

32

repositorio.unap.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

33

Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote

Trabajo del estudiante

<1 %

34

iuslatin.pe

Fuente de Internet

<1 %

35

dspace.unitru.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

36

pt.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

37

repositorio.uwiener.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

38

cdn.www.gob.pe

Fuente de Internet

<1 %

39

Submitted to Universidad Adolfo Ibáñez

Trabajo del estudiante

<1 %

40

es.scribd.com

Fuente de Internet

<1 %

41

Submitted to usmp

Trabajo del estudiante



Mary Isabel Colina Moreno  
DNI N° 40997649



<1 %

42

documents.mx

Fuente de Internet

<1 %

43

repositorio.uigv.edu.pe

Fuente de Internet

<1 %

Excluir citas

Activo

Excluir coincidencias < 15 words

Excluir bibliografía

Activo



Mary Isabel Colina Moreno  
DNI N° 40997649



## Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Zully Criss Chimpén Cadenillas  
Título del ejercicio: TESIS  
Título de la entrega: "La vulneración del derecho de defensa en las investigacion...  
Nombre del archivo: TESIS\_FINAL-\_ZULLY\_CRISS-\_08\_FBREERO\_2023-2.docx  
Tamaño del archivo: 1.13M  
Total páginas: 104  
Total de palabras: 27,692  
Total de caracteres: 153,180  
Fecha de entrega: 27-feb.-2023 09:58a. m. (UTC-0500)  
Identificador de la entre... 2024321280

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
ESCUELA DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN CIENCIAS  
CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES



PROYECTO DE TESIS  
"La vulneración del derecho de defensa en las  
investigaciones iniciadas contra el falso desconocido, en la  
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de  
Funcionarios de Lambayeque – Periodo 2020 – 2021"

Investigador:  
Abog. Zully Criss Chimpén Cadenillas

Asesor:  
Mag. Mary Isabel Colina Moreno

Lambayeque, 2023